

Manuel Solís
Francisco Esquivel

Las
Perspectivas
del
Reformismo
en
Costa Rica

Co-edición





JL1450

368

**Las
Perspectivas del
Reformismo en
Costa Rica**

Colección Centroamérica
(Departamento Ecuménico de Investigaciones)

Libros editados

Colección DEI - EDUCA

- JULIO DE SANTA ANA, El desafío de los pobres a la Iglesia
- FRANZ HINKELAMMERT, Ideología de sometimiento
- FRANZ HINKELAMMERT, Las armas ideológicas de la muerte
- HUGO ASSMANN (Ed.), Carter y la lógica del imperialismo, 2 vols.
- XABIER GOROSTIAGA, Los banqueros del imperio
- ELSA TAMEZ y SAUL TRINIDAD (Eds), Capitalismo: violencia y anti-vida, 2 vols.
- WIM DIERCKXSENS, Capitalismo y población
- VARIOS, Tecnología y necesidades básicas
- XABIER GOROSTIAGA (Ed.), Para entender América Latina
- SONIA GUTIERREZ (Ed.), Teatro popular y cambio social en América Latina
- GEORGES CASALIS, Las buenas ideas no caen del cielo
- WIM DIERCKXSENS y MARIO E. FERNANDEZ (Eds.), Economía y Población

Colección APORTES

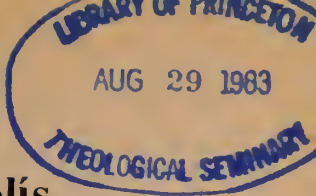
- ELSA TAMEZ, La hora de la vida. Lecturas bíblicas
- ELSA TAMEZ, La Biblia de los oprimidos
- RAUL VIDALES, Cristianismo anti-burgués

Colección TESTIMONIO

- VARIOS, Cristo vivo en Cuba. Reflexiones teológicas cubanas
- EDUARDO BONNIN, La Iglesia es noticia
- PABLO RICHARD, La Iglesia Latino-americana entre el temor y la esperanza

Fuera de Colección

- ERNESTO CARDENAL, El Evangelio en Solentiname, 2 vols.
- VARIOS, La lucha de los Dioses
- HUGO ASSMANN (ed.), El Banco Mundial: Un caso de "progresismo conservador"



Manuel Solís
Francisco Esquivel

**LAS
PERSPECTIVAS DEL
REFORMISMO EN
COSTA RICA**

CO-EDICION

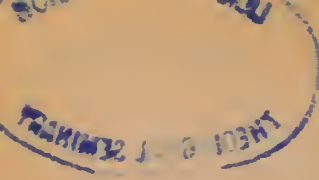


Departamento Ecuménico de Investigaciones



Editorial Universitaria Centroamericana

-1980-



Hecho el depósito de ley

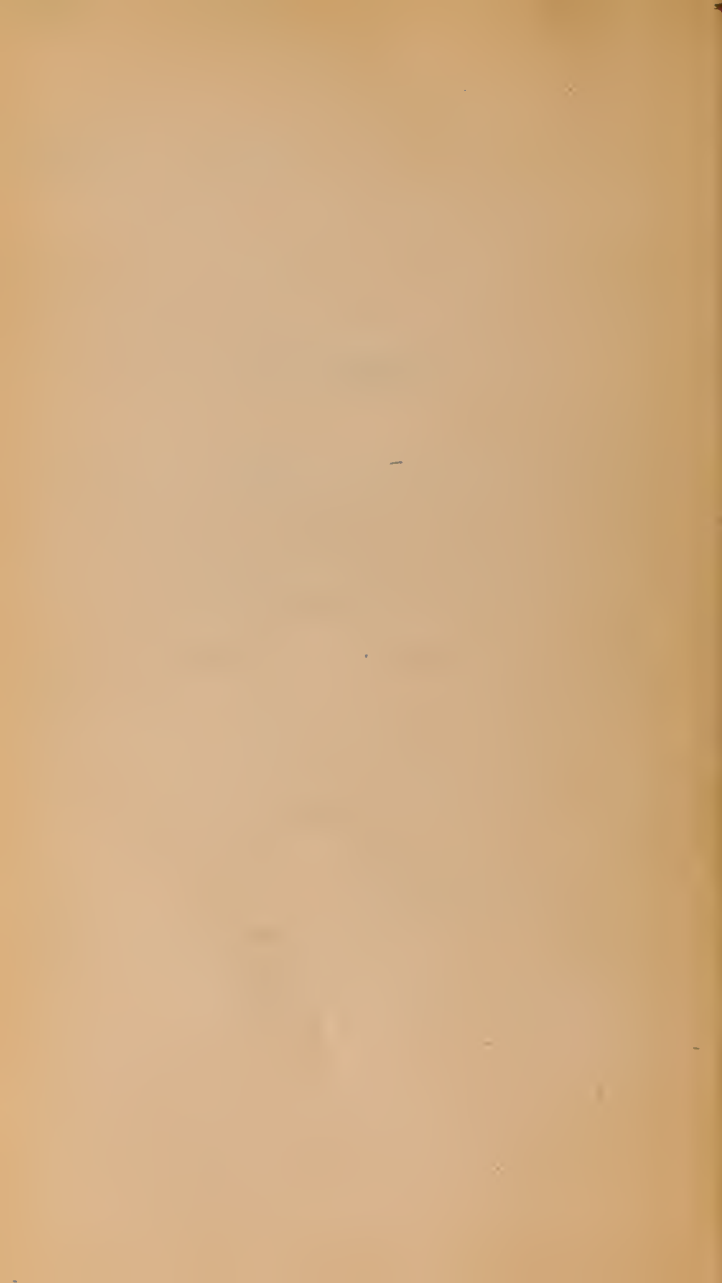
Reservados todos los derechos

DEI

Departamento Ecuménico de Investigaciones
Apdo. 339 - S. Pedro Montes de Oca
Teléfonos: 22-07-37 — 22-74-12
SAN JOSE — COSTA RICA

INDICE

Introducción	7
I. La constitución del 49 como resultado	9
II. Las premisas del nuevo Estado	29
III. La propuesta de las fuerzas emergentes	37
IV. El nuevo capitalismo y la reconstitución de las clases	45
V. La nueva fase crítica a nivel mundial	55
VI. Crisis interna y gobierno de Daniel Oduber	67
VII. La administración Carazo y las nuevas fuerzas en el Gobierno	79
Bibliografía	99



Introducción

El escrito que presentamos no es un trabajo acabado. Se trata más bien de un conjunto de proposiciones para discutir que los autores han elaborado como un subproducto de un trabajo más amplio, motivados por la discusión que en estos momentos se da a nivel nacional en torno al futuro del país. En un sentido estricto no puede entenderse como un estudio de coyuntura, es más bien un ensayo que busca enmarcar la problemática actual dentro de la evolución social y política del país en los últimos veinticinco años. Ello en tanto que se parte de la premisa de que un proyecto político como el que está implicado en el llamado “nuevo modelo económico” no se puede ejecutar según la imagen o concepción que de él tengan las fuerzas sociales que lo portan. En tanto que la realidad social está cruzada por la lucha de clases y ello se traduce en situaciones específicas de correlación de fuerzas, los planteamientos políticos tienen que irse adecuando a las mismas. Ello es válido también para la burguesía, desde el momento en que la vigencia de relaciones de producción capitalista supone la existencia de múltiples capitales luchando entre sí. Así entonces, las peripecias por las que está atravesando el “nuevo modelo”, no son posibles de ser explicadas a

partir de “la incapacidad de los gobernantes”, “lo ca-
duco de sus planteamientos”, etc., frases (¿concep-
ciones?) por desgracia sumamente divulgadas. La pers-
pectiva del último cuarto de siglo nos muestra cómo la
coyuntura actual solo cobra sentido dentro del proceso
de diversificación del bloque dominante y a la luz de los
cambios en la situación internacional. En buena medi-
da, lo que a un nivel “local” aparece invertido y carente
de sentido solo se pone de pie y se hace inteligible cuan-
do introducimos la dimensión del sistema económico
mundial.

En atención a estos criterios hemos hecho el orde-
namiento del material que presentamos. Nuestro objeti-
vo último es ayudar a generar una polémica que entre
los sociólogos y economistas, que no participan de las
concepciones oficiales, todavía no ha empezado. Si
la crítica de este ensayo contribuye a crear su clima de
polémica científica sobre la coyuntura por la que atra-
vieza el país nos podremos dar por satisfechos.

I. La constitución del 49 como resultado

La constitución actual de Costa Rica fue decretada en el año 1949. En un sentido es la carta que ha regido las transformaciones de los últimos treinta años, período en el cual se constituye el perfil de un estado democrático burgués sólidamente resguardado por mecanismos canalizados de las contradicciones interburguesas y firmemente asentado en la hegemonía del bloque dominante sobre las clases subalternas, un estado que corresponde al modelo occidental de que habla Gramsci, protegido por un sinnúmero de trincheras. Pero la constitución de 1949 es un resultado. Es la síntesis final de un turbulento período que se inicia en las primeras décadas del siglo actual, durante el cual las contradicciones sociales adquieren la forma de una onda expansiva que incluye no solo a las capas asalariadas sino también a sectores de pequeña y mediana burguesía, e incluso conmueven internamente la unidad de la gran burguesía. En este sentido la carta fundamental del 49 va a ser el retrato de la correlación de fuerzas existente al finalizar la primera mitad del siglo, ciertamente no cualquier fotografía, sino la fotografía del resultado final de una batalla con sus vencedores y vencidos.

Las raíces de los sucesos que desembocan en el conflicto armado de 1948, se encuentran en la modalidad de desarrollo del capitalismo costarricense. De un pasado colonial donde Costa Rica no era sino un confín, se ha llegado en la segunda mitad del siglo XIX a un capitalismo que sin formas económicas previas que obstruyan su expansión, ha producido profundas transformaciones. De

esta manera, las contradicciones que se van a desencadenar posteriormente emergen de una forma histórica de expansión del capital y de las limitaciones que impone el medio-naturaleza a ese desarrollo, no de la oposición de sectores no incorporados en relaciones sociales capitalistas.

Desde principios del siglo XX, el orden sobre el que se había constituido una poderosa oligarquía que personificaba en sí misma el proceso de concentración y centralización del capital empieza a agrietarse. En forma intermitente se dan una serie de intentones de la pequeña y mediana burguesía, e incluso de sectores de la misma burguesía por ampliar un marco institucional que impedía su expansión como clase, y que, en no pocos casos, amenazaba su misma sobrevivencia. A ello se sumarán las reivindicaciones de los sectores asalariados que han empezado a constituirse alrededor de las primeras manufacturas y fábricas, en el Estado mismo y en el agro. La población de los campos que participa de relaciones salariales se ha ido incrementando continuamente alcanzando a ser en el año 1927 el 40% de la población ocupada¹, aunque ciertamente no logrará traducir su peso real en peso político o gremial.

Las características de las confrontaciones nos remiten a lo que podríamos denominar un límite inferior dado por la forma en que está organizada la producción y la inserción en ella de los distintos sectores. Este marco nos contextualizará, aunque no determinará el desenvolvimiento de los hechos posteriores, cuyo resultado es la síntesis de un número mayor de elementos mediadores por los demás, diversos en su calidad.

Un primer elemento a resaltar está dado por los rasgos de la burguesía oligárquica. Las fuerzas que aquí se incluyen se distinguen por la calidad de los medios de producción que poseen, por el grado cuantitativo de incidencia sobre la base material de la sociedad y por tener intereses multisectoriales aun cuando su eje de inversión siga siendo el café. No es un sector distinto del resto de la burguesía ni contrapuesto a ella, sino aquel que controla los mecanismos claves de la reproducción del sistema, constituyéndose, por tanto, en un tope para los sectores burgueses subalternos.

Uno de los puntos en que se puede identificar a esta oligarquía es por su ubicación en la actividad cafetalera. En ella ejercen un control monopólico sobre el comercio de exportación y sobre su proceso. Además tienden a tenerlo también sobre la tierra. Su nota distintiva es monopolizar simultáneamente la exportación y el procesado. Menos de la mitad de la burguesía exportadora controlaba el 70% de las exportaciones antes de 1920, siendo este mismo grupo el que detentaba más del 60% del total de beneficios, porcentaje en el que se incluían fundamentalmente los de mayor capacidad instalada. De allí mismo salían los propietarios de ingenios azucareros más grandes que se establecieron en la primera mitad del siglo en el Valle Central, así como los poseedores de establecimientos agroindustriales de otro tipo e importantes almacenes al por mayor dedicados a distribuir mercancías importadas.²

Esta situación introduce una importante graduación dentro del bloque burgués y permite una transferencia de valor en beneficio de los sectores que se encuentran en la

cúspide, dado fundamentalmente a través de su oportunidad para incidir sobre precios de compra, condiciones de aceptación de los productos, préstamos y adelantos. Esto último es posible por su condición de administradores locales de los empréstitos y adelanto que hacen los importadores de café y por el control que ejercen sobre los bancos que se van fundando en el país. Los miembros más conspicuos de la oligarquía mantienen una íntima relación con las instituciones bancarias existentes, mostrándose tal vínculo a través de su condición de socios fundadores o por ocupar puestos de dirección. De allí una de las medidas centrales, si no la más importante de las fuerzas que irrumpen en 1948 sea la de la nacionalización de la banca, condición para poder disponer de los fondos iniciales necesarios en el proceso de diversificación capitalista que proponían, neutralizando, en consecuencia, el monopolio financiero de la gran burguesía. A la oligarquía, su condición de albacea del ahorro nacional le otorgaba una capacidad de decisión política que tiene que ser enfrentada por cualquier proyecto que tiende a incidir sobre las pautas de acumulación vigentes. Hasta entonces los grupos oligárquicos mantuvieron la capacidad para estimular o desalentar las iniciativas que partían de los grupos emergentes y en menor medida de la burguesía no oligárquica. No es casual por lo tanto, que la reforma de la nacionalización no pudiese ser conseguida dentro de los cauces institucionales ni que el mismo partido Social Demócrata o las organizaciones que confluyeron en él no levantaran tal consigna en forma abierta. Durante años la oligarquía había dado muestras de que la banca era uno de sus puntos más sensibles, de allí, por ejemplo, la beligerancia frente al proyecto de establecimiento de un Banco Unico Emisor o la forma sospechosa con que se ve el

fortalecimiento del Banco Nacional durante la coyuntura de guerra.

Una segunda fuente de contradicciones y tensiones sociales proviene del hecho de que el desarrollo capitalista en Costa Rica conserva un estrato importante de pequeños y medianos propietarios en el área del país donde se concentra el grueso de la población, a saber, el Valle Central. Esta aseveración tiene que entenderse dentro de límites muy precisos. No significa que Costa Rica fuese país de pequeños y medianos productores. Una versión extrema e ideológica. El capitalismo costarricense se desarrolló en forma comparativamente acelerada, en buena parte debido a que no tiene que vencer la resistencia de otras fuerzas. Una expresión de ello es la forma rápida y pronunciada del proceso de concentración y centralización. Otra es la constitución de un sector de asalariados, relativamente numeroso, producto de un proceso de acumulación originaria que no por no tener el mismo tono de violencia que en otras sociedades ha dejado de darse. El hecho de que la categoría de los jornaleros fuese poco menos de la mitad de la población ocupada en 1927, siendo el momento en que este dato se registró un período que no era de cosecha de café³ (cuando el total de asalariados aumenta) habla claramente de relaciones capitalistas. En el mismo sentido apuntan los datos sobre concentración de la tierra, cuadro explícito y evidente fuera del Valle Central e incluso en los bordes del mismo, pero más difícil de detectar en el interior del país en tanto que la burguesía tiene la propiedad sobre fincas que son unidades estadísticas separadas, en sí mismas pequeñas, y por la práctica de adquirir prioritariamente tierras que fuesen la fuente de una renta diferencial en razón de su localización

respecto a los puntos de procesamiento (caso de tierras cafetaleras y cañeras) o por la calidad de los terrenos.

Sin embargo, el proceso de desintegración de la propiedad agraria, no burguesa tiene sus límites. Uno de ellos está dado por la existencia de una población total reducida y un espacio de colonización amplio. A pesar de que desde el siglo XIX la población costarricense viene en ascenso, el universo total era apenas de 471.500 habitantes en 1927, de los cuales casi el 75% se localizaba en un área muy pequeña marcada por la Meseta Interior. Por ello la pérdida del acceso a la tierra no significaba automáticamente proletarización, sino, en muchos casos, reconstrucción de una economía campesina e incluso latifundaria en las provincias periféricas al Valle Central. De allí que, contrario a lo esperado, los mismos capitalistas tienen que acudir incluso a recursos extraeconómicos para atraer o contener el desplazamiento de la población (préstamos de vivienda, entrega de parcelas, leña). La venta de la fuerza de trabajo no es entonces un acto "puro" sino que está acompañado de la entrega de, o del derecho sobre, un conjunto de servicios que combinan en sí mismos el carácter de forma no monetaria de una porción del salario y mecanismo físico de sujeción. De allí que, en la perspectiva global, la población desposeída de sus medios de producción no nos remite inmediatamente a relaciones capitalistas de producción.

• Por otra parte está el problema de reclutar periódicamente una cantidad superior de trabajadores de los que se dispone efectivamente, para atender la cosecha de café. Históricamente los brazos para esta labor han salido, en primer lugar, de los pequeños productores que junto con

su familia adquieren ocasionalmente la condición de asalariados, reintegrándose a las labores propias una vez pasada la cosecha. En ese sentido la pequeña y mediana propiedad han actuado como un silo que conserva fuerza de trabajo, y que posibilita que, en el momento justo, se puedan reclutar los brazos necesarios, sin que posteriormente desaparezcan o se corra el riesgo de no poder tener acceso a ellos nuevamente.

Las dificultades para obtener fuerza de trabajo, las demandas desiguales de la misma en el tiempo, la imposibilidad de mecanizar la producción y el comportamiento del mercado internacional crean el espacio para la permanencia de la pequeña y mediana producción cafetalera, pesar de las tendencias de largo plazo.

De esta matriz surgen también las contradicciones que llevan al enfrentamiento entre productores caficultores y la gran burguesía. Así vemos cómo la creación del Instituto de Defensa del Café está precedido por una ola reivindicativa en torno al problema del crédito, los adelantos y los precios. Los pequeños productores son los primeros en resentir los manejos que hacen los propietarios de beneficios y exportadores por atenuar los efectos de la crisis mundial trasladándolos hacia los productores en pequeño. Estos habían incluso buscado superar su situación de desventaja al constituir una organización cooperativa. Sin embargo, la iniciativa fracasa; aunque es lo suficientemente sonora como para obligar a la mediación gubernamental. Surge entonces el Instituto que obliga a los beneficiarios en el cumplimiento de sus fechas de pago, fija los adelantos en los precios del café y establece un margen de ganancia para los industriales.⁴

Tal iniciativa estatal atempera las tensiones e impide que los sectores de pequeños propietarios sean atraídos hacia posiciones políticas radicales. En todo caso no elimina las contradicciones existentes y será, otra vez, el Centro de Estudios de los Problemas Nacionales, quien hará una propuesta más atractiva para estos sectores al levantar, como una reivindicación fundamental en su programa, el apoyo técnico y financiero a los pequeños productores, así como la organización cooperativista.

Casi diez años después de fundado el Instituto de Defensa del Café, (a principios de 1940) aparece la Liga de la Caña, organización que tiene las mismas finalidades que el Instituto y que expresa una situación parecida en las relaciones entre propietarios y dueños de ingenios, que como ya dijimos son también propiedad de connotados caficultores y beneficiadores. Se trata, por lo tanto, de una nueva manifestación de las tensiones existentes en relación con la gran burguesía.

En otro sentido, la situación de los industriales urbanos es una fuente de contradicciones. La Ley de Protección Industrial del año 1940 es insuficiente puesto que su principal incentivo es el derecho a importar libre de impuestos y durante cinco años materias primas y bienes de capital. Pero no se va más allá en parte por la coyuntura política que se abre por los mismos años, pero también por carecerse del soporte institucional necesario.

Como quedará evidenciado en el transcurso de los años siguientes, la posición de la oligarquía ante el desarrollo industrial se sustenta en una percepción de la actividad como no rentable en el corto plazo y un temor,

más o menos fundado, en la profundización de la escasez de fuerza de trabajo en la agricultura del café, principalmente. No es, por tanto, la oposición de un grupo atrasado o agrarista. Es una posición ordenada por una racionalidad capitalista, en razón de la cual visualizan las limitaciones y el riesgo económico de tal empresa. Ciertamente la crisis de 1929, y, posteriormente, la Segunda Guerra habían creado condiciones para la expansión de actividades artesanales y manufactureras, e incluso había tomado cuerpo una incipiente industria fabril ligada a las bebidas, los alimentos y los textiles. Sin embargo, sus posibilidades no deben sobrevalorarse dadas las dimensiones absolutas del mercado local y las contracciones que este experimentó. De allí que saltos significativos en este rubro no podían ser producto de su ritmo de acumulación exclusivamente; se requerían cambios que afectasen a la sociedad en su conjunto y una nueva valorización de la coyuntura internacional. Esto no era desconocido para la burguesía ya que algunos de sus miembros más connotados extendían sus inversiones a la industria urbana, aunque tal cosa fuese encubierta por el predominio de los pequeños y medianos industriales.

A lo que son las reivindicaciones propias de los sectores que tienen en propiedad medios de producción, se agregan las de los asalariados. En las artesanías y manufacturas, los problemas atinentes al salario, las horas de trabajo, las jornadas nocturnas y los accidentes laborales causan formas de organización que se van desarrollando desde los gremios hasta los sindicatos. La huelga bananera del 34 había servido no solo para poner en evidencia las condiciones laborales de los asalariados del monopolio frutero, sino también para poner en discusión el proble-

ma mismo del imperialismo; discusión que es asumida con gran calor en la pequeña burguesía. Con la gran crisis tiene que sumarse a los problemas mencionados el del desempleo: tanto el sector público como el privado tienen que contener sus inversiones y reducir el número de trabajadores. La situación se tornará crítica, no solo para los desempleados sino también para los que permanecen en sus puestos de trabajo, ya que la reacción defensiva de la burguesía será el incremento de la explotación. Dentro de este clima de efervescencia y radicalismo es que surgirá el Partido Comunista que en una primera época (hasta 1942) mantiene una línea de intransigencia y enfrentamiento directo. Pero también se abren posibilidades para otras fuerzas.

A partir de lo que hasta aquí hemos enunciado se puede comprender por qué junto a los agrupamientos políticos que reúnen a lo más rancio de la burguesía empiezan a surgir otras formaciones políticas donde el peso de la pequeña y mediana burguesía es muy significativo. El Partido Reformista del General Volio es quizás el ejemplo más nítido y temprano. Como su nombre lo indica, la base de su programa es una reforma social y política en la que se mezclan planteamientos anti-imperialistas, una concepción de la democracia política en la que se ve todavía cierta influencia anarquista y una línea de reivindicaciones en las que se combina la crítica al latifundio y la petición de la distribución de la tierra, las seguridades laborales y la educación laica. Esto dentro de los marcos políticos establecidos y métodos que se centraban en la lucha electoral.

En la década de los cuarenta aparecen el Centro para Estudios de los Problemas Nacionales y la Acción De-

mócrata, desprendimiento del Partido demócrata liderado por León Cortés. En 1945 ambas organizaciones darán origen al Partido Social Demócrata (PSD), organización que mantendrá una alianza con la gran burguesía en su lucha contra el movimiento de masas encabezado por el Partido Comunista, pero que, a la vez, guardará una prudente distancia frente a la oligarquía levantando un programa de reformas cuya consecuencia es poner entre paréntesis la estructura misma del Estado. Hay sectores del PSD, concretamente el Centro, que mantienen una línea semejante a la del Partido Reformista, de allí que el programa original de esa comunidad intelectual toca los puntos centrales del reformismo (anti-imperialismo - posesión de la tierra - cooperativismo - seguridad social) pero ubicándolo dentro de una propuesta más congruente, basada en la diversificación de la producción y la asignación de nuevas funciones al sector público.⁵ Esto último hace que algunos de sus miembros tomen como punto de referencia el interrumpido gobierno de González Flores derribado por la oligarquía, entre otras razones por la propuesta de instauración de un sistema tributario basado en impuestos directos sobre la renta y la propiedad.

Este antecedente, así como la explosiva reacción de la burguesía frente a las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, institucionalizados en el año 1943 por el Gobierno de Calderón Guardia, hacen que el PSD asuma una posición que puede definirse como una lenta acumulación de fuerzas en su favor. Por ello la crítica fundamental a los gobiernos de Calderón y Picado no serán contra las reformas mismas, sino contra la alianza de éstos con los comunistas, la corrupción, el uso partidario de las conquistas logradas y por último, la bancarrota del pro-

ceso electoral. Con eso se ubican en una situación que no los aislaba de sectores asalariados y pequeño burgueses, y por otra parte, podían conservar la alianza con la oligarquía. La posición de clase de los socialdemócratas era la que les permitía realizar esta doble operación política. Así en los objetivos del PSD leemos:

“1. El progreso de la República dentro de los marcos constitucionales con absoluta prescripción de la violencia y total respeto a la tradición política liberal;

2. Régimen basado en la opinión pública, mediante la libertad de sufragio y demás libertades complementarias;

3. Respeto absoluto a las convicciones religiosas, filosóficas y políticas de los costarricenses”⁶.

Con estos planteamientos se explicitaban los límites dentro de los cuales se desarrollarían sus iniciativas. Son asimismo los que permiten establecer un frente común con la oligarquía. Pero siguen luego siete puntos que le dan al PSD su sello distintivo y que muestran simultáneamente la conciencia de las contradicciones sociales que se habían venido acumulando, yendo incluso más allá que el mismo PC, que ya por esos momentos se replegaba en torno a la defensa de lo adquirido. La orientación del grueso del programa es la siguiente...

1. Incremento de la riqueza nacional *mediante la protección* y el estímulo a la pequeña propiedad y pequeña industria.

2. Protección justa y racional contra el capital extranjero.

3. Reorganización de las finanzas públicas y creación del servicio civil.

4. Organización cooperativa en la agricultura y ayuda técnica mediante instituciones autónomas.

5. Defensa de los asalariados mediante el *sindicalismo apolítico*.

6. Defensa de los consumidores mediante cooperativas e incremento de la renta nacional.

7. Educación Pública adaptada a las condiciones del país y sus necesidades técnicas.

La sola posibilidad de que alcanzaran estos puntos programáticos ya implicaba transformaciones importantes. Sin embargo, el que se oculte el planteamiento sobre la transformación bancaria significa, además de realismo político, una perspectiva más amplia, en la cual está contenida un reordenamiento de la sociedad misma.

La necesidad de buscar la coyuntura favorable para imponer un programa marcará los movimientos del PSD. De esta manera trabajó para evitar acuerdos bilaterales, que pudieran llevar a compromisos desfavorables para sus propósitos, entre el gobierno y la oposición burguesa. Tal posición la mantuvo incluso en la fase inmediatamente anterior al estallido de la confrontación militar, favoreciendo la radicalización del proceso político. Su comportamiento es, por lo tanto, distinto al de la oligarquía que, buscando evitar situaciones no controlables, trata de encontrar canales de comunicación con sus adversarios.

Por otra parte, fueron los socialdemócratas quienes trabajaron en la preparación para un momento militar, reclutando hombres y buscando armas en el extranjero. El desencadenamiento violento del conflicto fue previsto, y se dio el hecho de que, al crearse las condiciones para éste, solo Figueres y su gente podían encabezar una acción de fuerza contra la alianza Calderonista-Comunista.

Bloqueadas las iniciativas conciliadoras de la oligarquía y teniendo las armas, solo faltaba una base social. Esta también fue conseguida. Su fuente principal fue en primer lugar el campesinado, que sobre todo en el Valle Central se desplazó desde las posiciones cortesistas a las del PSD, en las que veían la perspectiva de reformas favorables a su condición de clase en armonía con su anti-comunismo. Las ciudades también aportarían su contingente humano al ejército figuerista. Sectores de la pequeña burguesía y trabajadores asalariados fueron enrolados. Una fracción numerosa de estos últimos se reclutó gracias al sindicalismo blanco-eclesiástico que junto con su líder, Benjamín Núñez, pasan a engrosar finalmente las filas del reformismo anticomunista.

La conjunción de una propuesta política clara, las armas y el apoyo de masas darían la hegemonía a la fuerza política representada por Figueres que logra constituirse en la columna vertebral de la oposición. Ello es lo que le va a dar la fuerza necesaria para introducir reformas en la constitución de 1871, de la cual va a salir la constitución del 49. Mas la hegemonía no implica anulación de los aliados. El que los reformadores del 49 tuviesen que tomar como punto de referencia la constitución inmediatamente anterior refleja en realidad la fuerza que conserva

la oligarquía, la cual, pese a todo, se mantiene limitando las iniciativas modernizantes.

En lo que si será tajante el nuevo orden va a ser en el tratamiento de la oposición comunista. El partido Vanguardia Popular (PC) quedará proscrito, sus dirigentes tendrán que exiliarse; muchos de sus miembros fueron muertos y el partido fue aislado de las masas, con la sola excepción de los obreros bananeros. De esta forma la creación del Estado Democrático, tendrá como condición la eliminación del principal rival de la oligarquía y el reformismo burgués. El gran espacio de maniobra que queda abierto para estos últimos se debe básicamente a que la "reducción" de los comunistas, estando coronada por una derrota militar fue previamente una derrota política. ¿Qué factores pueden explicar esta situación? Resumámoslos brevemente.

A principios de los años cuarenta el Partido Comunista era el principal punto de referencia para los sectores asalariados. El prestigio adquirido en la lucha contra las compañías fruteras, aunado a posiciones radicales que enfrentaban a la burguesía en su conjunto y desafiaban la institucionalidad vigente, hacía que las fuerzas que habían venido incorporando a la lucha reivindicativa en los años precedentes encontraran allí la expresión de sus intereses. Incluso, después de haberse concitado la alianza con Calderón Guardia, y por su intermedio con un sector de la Iglesia, el atractivo del ahora Vanguardia Popular se mantiene, alcanzando una presencia que en proporción nunca la ha vuelto a tener. El número de diputados comunistas casi se triplicó en cuestión de diez años, su influencia en el gobierno era ostensible y la base sindical

que se encontraba bajo su condición se multiplicó. Con ello el PC pasaba de las bananeras al Valle Central y crecía en las principales ciudades. Además, aunque no aparecieron como tales en la imagen que se presentaba, eran los principales impulsores de las Garantías Sociales y el Código del Trabajo. Alrededor de estas reivindicaciones, fundamentalmente de su defensa una vez adquiridas, centraron su acción y se expandieron como organización política.

Sin embargo, en las características de las alianzas que había conseguido el PC estaban también los elementos que actuarían en su contra. A nivel del partido mismo la disolución del PC y su conversión en Partido Vanguardia Popular (PVP) hizo que aumentara el número de su militancia, pero la calidad política de la misma se debilitó en tanto que en el planteamiento del nuevo partido desaparecían los aspectos atinentes al problema del poder y la posibilidad de la revolución.⁷ En 1948, en las puertas mismas de la revuelta militar el partido se definía a sí mismo como el protector de “la democracia, la libertad, el bienestar y el progreso de la nación”,⁸ lo que era la consecuencia de su desplazamiento desde preocupaciones estratégicas revolucionarias hacia una concepción defensiva de la democracia liberal.

Con respecto al problema sindical el partido Vanguardia Popular quedó atrapado entre dos pinzas. Por una parte su pacto con Calderón Guardia le impedía desarrollar la politización de los sindicatos que de esta manera quedaban restringidos a lo estrictamente reivindicativo; por otra parte el Código del Trabajo permitía el sindicalismo paralelo, o sea, la existencia de varios sindica-

tos en una misma empresa. Tal medida fue auspiciada por la Iglesia, que desde el año 42 busca frenar y neutralizar al Partido Comunista luchando en su propio campo. La Iglesia optó por desarrollar su propio frente de masas, el cual tomará cuerpo en la Central Sindical Rerum Novarum. Su desarrollo es también muy acelerado, pasando de tener 15 sindicatos en 1943 a 102 sindicatos afiliados en 1945, de los cuales 85 eran activos.⁹

Después de 1946, la dirección de la Rerum se desplazará con sus sindicatos hacia las posiciones socialdemócratas, integrándose plenamente en la lucha militar el cura Benjamín Núñez, quien llega a ser su líder y Ministro de Trabajo de la Junta que se establece en el año 48. Esto ocurría mientras el PVP se encontraba limitado de desarrollar una lucha ideológica contra quienes buscaban el movimiento sindical, amarrado por los pactos hechos.

Desde luego que los dos aspectos mencionados no pueden comprenderse solo por una rigurosidad en cuanto al cumplimiento de acuerdos políticos. Más allá de eso estaba el aval y el esfuerzo por llevar a la práctica la tesis de los Frentes Populares según las directrices del VII Congreso de la Internacional. Dentro de esta concepción no solo se buscarán alianzas con sectores de la burguesía, sino también, como en el caso de Costa Rica, se suspenderá una política de unidad del pueblo. En este último sentido es importante resaltar que a pesar de su crecimiento, el desarrollo de Vanguardia Popular en estos años es fundamentalmente urbano y bananero, pero no logra penetrar en el campesinado. Este último, sin ser la fuerza numéricamente mayoritaria, tiene en el caso costarricense la particularidad de estar concentrada en y alrededor de las re-

giones cafetaleras, y está íntimamente vinculado con el estrato mucho más numeroso de los peones y jornaleros. De allí que las posiciones políticas del campesinado, cortesistas inicialmente y socialdemócratas luego, pudiesen ser canalizadas hacia capas importantes de asalariados agrícolas. A esto debe sumarse el que beneficios como el Seguro Social no alcanzarán a un sector numeroso de asalariados agrícolas que trabajan en esa condición menos de 180 jornadas al año,¹⁰ en tanto que la legislación recién establecida los marginaba. Este aspecto y el no encontrar en las reformas de estos años nada específico para los asalariados estacionales y pequeños productores, confirma la hipótesis de que la política de alianza con la burguesía anula una línea de alianza popular. En este mismo sentido tanto las Garantías Sociales como el Código de Trabajo si a alguien golpeaban era al enclave imperialista, al comercio urbano, al pequeño sector industrial. De allí que puede argumentarse que el peso fundamental de las reformas de los años 40 no iba a golpear a la gran burguesía, ya que en la economía del café los asalariados de más de 180 jornadas al año son pocos, reduciéndose a algunos trabajadores de beneficio y a unos pocos del campo, y en razón de que no incidían sobre la relación pequeño-productor-benefactor. La oligarquía reacciona principalmente por lo que era de prever si este tipo de reformas continuaba y si aumentaba el peso político de Vanguardia Popular, pero no porque fuese la más afectada. En realidad, los más seriamente afectados fueron establecimientos urbanos, de pequeña y mediana burguesía que contrataba trabajo asalariado más permanentemente. La legislación les restaba la posibilidad de competir e incluso los amenazaba con sacarlos del mercado.

La base social del PVP tendrá por tanto sus debilidades. El apoyo en los obreros bananeros es sólido, pero su situación de aislamiento en las costas del país impide que su perspectiva de clase pudiera irradiar hacia otras capas de la población, y por lo tanto influirlas ideológicamente. Cuando se decide llevar obreros bananeros a las ciudades ya no es dentro de un razonamiento político (en el sentido comentado) sino militar,¹¹ lo que dificultará aún más su relación con otros sectores de la población. En relación a los trabajadores urbanos de la industria y el comercio organizados bajo la dirección comunista, estos eran por una parte muy minoritarios en relación a la población total. Además habían sido divididos por la Rerum. Pero el problema fundamental es que su ubicación en la estructura de clases no los enfrentaba a la gran burguesía directamente. De allí que en una lucha donde el enemigo central era la oligarquía no se logró llegar a las fuerzas que tenían su contradicción principal con aquella, a la vez que se polarizaba hacia el enemigo potencial aliado.

El aislamiento de los que deberían ser aliados naturales queda graficado en la forma como finalizó la guerra del 48. El gobierno perdió las ciudades más importantes y quedó reducido a la capital. El campo era socialdemócrata y la defensa del último bastión gubernamental, así como en realidad el peso mismo de la guerra se descargó sobre los obreros bananeros, que por lo demás desde 1947 eran la base de las fuerzas de choque con que se combatía a las homólogas de la oposición burguesa. Por ello más que el calderonismo los vencidos fueron los comunistas y contra ellos caerán luego las medidas segregatorias necesarias para una democracia ejemplar.

II. Las premisas del nuevo Estado

La derrota político militar del movimiento popular en la década de los cuarenta no significó en el caso de Costa Rica una evolución hacia fórmulas políticas autoritarias, centradas en la violencia más que en el consenso (Ej. el caso de Guatemala después de Arbenz). Contrariamente, el reagrupamiento que se da al interior del bloque dominante con el retroceso de la burguesía oligárquica y la consolidación de un sector emergente que aglutina a la burguesía no oligárquica y sectores de la pequeña burguesía urbana y rural, lleva a la delimitación de un proyecto político de corte reformista burgués. Se pasa por tanto de un esquema político reformista pequeño-burgués (1942-1948) a un reformismo burgués, cuyo principal propulsor va a ser el Partido Liberación Nacional. El éxito de este último proyecto dependió de la conjunción de cuatro factores:

a. En primer lugar se asistía a nivel del capitalismo mundial a una redefinición en la división internacional de trabajo que posibilitaba nuevas líneas de acumulación en la periferia. Esto significaba la oportunidad de concretar un proyecto de desarrollo industrial en estrecha alianza con el capital monopólico norteamericano e incentivos para la diversificación de la estructura agraria, insertándose en puntos donde la oligarquía no estaba presente o no era significativa. En un primer momento esto significa expansión de los productos de exportación, aunque a partir del año setenta también toma cuerpo para la producción capitalista de artículos de consumo doméstico, para los cuales existe una considerable demanda por la expansión del mercado interno.

La situación internacional permite un proceso de crecimiento económico y una nueva etapa en el proceso de acumulación interna. Dentro de la concepción política del PLN el Estado tenía que jugar un papel de primer orden en cuanto a facilitar la consecución de estos objetivos. De allí que por una parte se convertirá en un instrumento clave en el proceso de expansión del capital, tanto local como extranjero (esto queda ejemplificado con el uso que se ha hecho del crédito proveniente de la Banca Nacional en los últimos treinta años). Por otra parte al asumir tareas más amplias, no concernientes a ningún capital en particular, se constituirá en un gran empleador, punto de referencia fundamental para comprender la constitución de un fuerte sector de pequeña burguesía asalariada, material, ideológica y organizativamente dependiente del PLN, y que actúa como elemento mediatizador sobre una clase obrera sin experiencia política (por su juventud) y pequeña en número.

En un plano más político, lo anterior transcurría en un clima internacional anticomunista alimentado inicialmente por la guerra fría, y revitalizado posteriormente en el ámbito latinoamericano como deacción a la revolución cubana. Las líneas reformistas que se impulsarán a nivel continental después de la reunión de Punta del Este no significarán un esfuerzo adicional para las fuerzas políticas que conducían el estado costarricense sino que concuerdan plenamente con el planteamiento que está en marcha, a saber, reformas conducidas sin comunismo.

b. Lo anterior podría ser insuficiente si no estuviese presente un elemento más, a saber, una fuerte conciencia reformista que no fue reorientada en el período 42-48, y

que nuevamente era alimentada por la fracción burguesa que emerge con el Partido Liberación Nacional. Ya señalamos más atrás cómo la derrota militar de la alianza PVP—Calderón Guardia fue precedida de una derrota política. La propuesta de la socialdemocracia logra captar para sí una porción muy significativa del movimiento de masas, en buena medida porque no se opone a las reformas sino más bien les da un nuevo encuadre político. El PLN se presenta ante los ojos de las masas como la posibilidad de continuar adquiriendo victorias (sin perder las conquistas alcanzadas) sin corrupción y sin presencia de la izquierda como fuerza política por lo menos hasta que se haya restablecido la hegemonía sobre las masas. La derogatoria del segundo párrafo del artículo 98 de la constitución, con el cual se ilegalizaban los partidos populares se da hasta mediados de los años setenta cuando los mecanismos de control político sobre las clases subalternas han alcanzado un alto grado de sofisticación y han mostrado su efectividad, siendo una de sus expresiones más acabadas el sistema electoral.

c. La primacía de los controles ideológicos sobre los mecanismos de violencia debe valorarse en perspectiva histórica. Sin que pretendamos afirmar que la violencia ha estado excluida como instrumento político para alcanzar los objetivos de distintos sectores de las clases dominantes en su relación con las clases subalternas, no es menos cierto que su utilización no se ha dado con la misma frecuencia e intensidad que en los otros países centroamericanos. Ello se traduce en que el ejército como institución no alcanzara una plena vigencia en la historia nacional y la administración de la violencia quedara a cargo de un aparato policial no profesional que se ampliaba con

civiles para enfrentar contingencias atinentes a la seguridad nacional. Incluso puede afirmarse que en aquellos momentos en que los cuerpos castrenses intentaron consolidarse (por ejemplo bajo la dictadura de los Tinoco), la reacción de las fuerzas que desplazaron a los militares no fue la de monopolizar a su favor la incipiente estructura de violencia sino debilitarla.

Durante los gobiernos conducidos por la alianza PVP-Calderonismo el ejército no alcanza una posición relevante. Las fuerzas de Figueres no alcanzan tampoco la estructura de un ejército pero su superioridad técnica y la base social de apoyo con que cuenta resulta suficiente para imponerse en la contienda. La naturaleza de la victoria que se tiene hace que el ejército pueda ser proscrito por los vencedores, la base de la fuerza militar liberacionista pasa a ser la fuente principal de la que se va a nutrir el Partido Liberación Nacional. El ejército se metamorfisa en partido y el partido se constituye en un partido de masas con una estructura interna cuya eficiencia recuerda un ejército.

d. Por último debe recordarse que los sectores oligárquicos ceden negociando. Con un gran realismo se dan cuenta de la imposibilidad de volver a una situación pre-reformas. Después de todo ellos no son los que han llevado la pauta en los sucesos del 48, no son ellos los que tienen el respaldo de un importante contingente de los sectores populares, tampoco tienen una fuerza militar propia. En estas condiciones se deciden por negociar las transformaciones a la constitución de 1871, y a través de Ulate buscan boicotear los puntos más espinosos en las nuevas reglas del juego que se están sentando. Un éxito en

este sentido es la derogativa del impuesto del 10% sobre el capital que había decretado la Junta de Gobierno cuando se dio el decreto de nacionalización bancaria. Otro tanto fue la legislación sobre rentas y alquileres. El que Figueres y los suyos optaran por darle la presidencia a Ulate en el año 1952 creó la coyuntura necesaria para terminar de negociar aquello que, con la correlación de fuerzas que se tenía, podía hacerse. Los fundadores de la Segunda República tienen que contener parte de sus ansias reformistas con el fin de no profundizar las contradicciones interburguesas.¹²

Los puntos que hemos enunciado, deben complementarse con dos observaciones más, necesarias para comprender las particularidades del modelo político que cristaliza en los años cincuenta. El proceso de reorientación de las relaciones entre las fuerzas sociales encuentra especificaciones provenientes del desarrollo de las fuerzas productivas.

La cuestión de la población es un primer punto importante. Una constante en la historia costarricense es el impacto de un volumen reducido de población que actúa como límite o barrera para la economía colonial en un primer momento y para el régimen oligárquico-burgués en un segundo momento. La incorporación al mercado mundial capitalista a mediados del siglo XIX incidió ciertamente en el crecimiento poblacional aunque no lo suficiente para crear una abundante oferta de fuerza de trabajo para el capital, y la extensión de éste —a lo ancho— tiene que contar con tal obstáculo.

De lo anterior se desprende que un desarrollo capitalista más profundo —como lo planteaban las fuerzas

emergentes en el 48— requería de una cuidadosa política de reproducción de la fuerza de trabajo. Para el capital, la ausencia de un voluminoso ejército de reserva que permitiese basar la acumulación en extracción de plusvalía absoluta, lo obliga a diseñar los mecanismos sociales para elevar la productividad de la clase obrera vía su capacitación (lo que implica un fuerte impulso a la formación técnica a distintos niveles) y a través de la extensión del período productivo de cada trabajador individual, una de las tareas principales —aunque no exclusivas— del aparato institucional encargado de la “salud de masas” (Caja Costarricense de Seguro Social). En este punto la burguesía retoma y profundiza una conquista del movimiento popular en los años 40 dándole un nuevo contenido.

En síntesis: el capital tiene que hacer, en el caso de Costa Rica, una alta inversión en la producción y reproducción de la fuerza de trabajo, lo que incide sobre sus ganancias totales, en cuanto las deprime. Sin embargo, es también la única forma de obtenerlas. En un período expansivo como el de los años 50 y 60 tal era un costo necesario y posible de asumir.

Otro aspecto relacionado con esta temática son los recursos naturales de que se podía disponer. El país ofrecía condiciones para desarrollar cultivos alternos al café con posibilidades de exportación. En la práctica ello significa la oportunidad de competir con los grupos oligárquicos sin tener que desplazarlos totalmente del café (lo que supondría otro juego político) ni tener que dismantelar la economía cafetalera, lo cual afectaría los otros proyectos, particularmente el proceso de in-

dustrialización. Al contrario, la existencia de un considerable espacio geográfico que se incorpora a la dinámica del capital facilitaba la consolidación de los grupos de la burguesía en ascenso sin profundizar aún más sus contradicciones con la fracción debilitada.

Asimismo la existencia de un inmenso potencial en recursos hidroeléctricos facilitan la tarea de aceleración del crecimiento económico, a la vez que ofrece condiciones para atraer inversión extranjera, particularmente en el sector industrial. Ello tomó cuerpo entre otras cosas, en el establecimiento de precios preferenciales por unidad energética, por debajo del precio del mismo factor para el consumidor promedio. En otras palabras se subsidió también desde este punto de vista al capital foráneo.

Hay por tanto factores de índole "rentísticos", que sumados a los externos permiten plasmar un proyecto político en el que convergen una nueva fase de expansión capitalista con la consolidación de una forma de Estado, que expresaba un nivel de acuerdo al nivel de las fracciones burguesas beligerantes y la dirección ideológica y política sobre las clases dominadas.



III. La propuesta de las fuerzas emergentes

Tratemos ahora de describir el planteamiento que entra en vigencia a partir de 1949.

El principio básico de la propuesta se centraba en la necesidad de diversificar la producción agropecuaria, incentivar nuevos productos de exportación y abrirse a un proceso de industrialización. Con esto se pretendían desarrollar nuevos polos de acumulación con la dinamicidad suficiente para alcanzar un nuevo tipo de inserción en el mercado mundial, y de esta manera competir con la burguesía oligárquica que ya estaba consolidada sobre su base de acumulación, a saber, el café. En otras palabras se trata de interrumpir el proceso de *centralización* capitalista que se venía dando desde la primera mitad de siglo para incentivar procesos de concentración, es decir, para alentar la formación de nuevos capitales.

En este sentido, resulta claro el desarrollo posterior de ciertas ramas de producción. La industrialización se monta sobre la producción de consumo no básico, sin dejar de lado algunas líneas de producción básicas. De las primeras podemos citar la producción de químicos, para consumo (llantas, neumáticos, productos farmacéuticos de lujo, pinturas e insumos como el cemento) y productos metal-mecánicos (maquinaria y equipo, automóviles, etc.). Entre los segundos están la carne, productos lácteos, dulces y algunos granos. Luego, la diversificación agrícola se basó en el desarrollo de la ganadería, producción de azúcar, banano y granos básicos (arroz principalmente).

Es importante precisar que la base de acumulación estratégica fue la generada por la diversificación en el agro. *El desarrollo industrial fue hegemonizado por el capital extranjero que subordinó al nivel gerencial las posibilidades de conducción y beneficio de la burguesía nacional.* Aquí tiene particular importancia el dominio de la tecnología que es la pieza maestra para legitimar la propiedad sobre la plusvalía. Por eso resultó más factible la consolidación de capitales nacionales en las líneas agropecuarias resultantes de la diversificación.

Por otra parte, este tipo de desarrollo capitalista suponía la intervención del Estado para apoyar la dinámica de acumulación. El papel que cumpliría sería de diversa índole. Tendría que ocuparse de desarrollar la infraestructura necesaria: energía, caminos, seguridad social, vivienda. Con la nacionalización bancaria, jugaría un rol financiero clave, ya que el Estado se atribuía el derecho de movilizar los fondos del ahorro privado y del financiamiento externo, con lo que dominaba uno de los ingredientes básicos de la promoción de inversiones. También manejaría una buena parte de los mecanismos ideológicos para mantener la hegemonía de clase; y además, cumplía la función de regulador y administrador de la justicia, imprimiéndole un carácter más profesional y más "encubiertamente" político a esta institución y a sus servidores.

En el plano político, la fracción emergente necesitaba hacer un planteamiento suficientemente amplio en oportunidades y expectativas de surgimiento para toda una gama de fuerzas sociales, que iban desde la burguesía no oligárquica hasta el proletariado. Para la burguesía no

oligárquica se ofrecía la posibilidad de obtener una inserción consistente en el capitalismo mundial, que ya fuera por la vía de la exportación cafetalera o por la de líneas alternas, se le habría negado. Para la pequeña burguesía rural se abría la expectativa de un crecimiento económico sostenido que reportaba facilidades de inversión y mercado seguro. Una nueva pequeña burguesía urbana veía abrirse una serie de posibilidades en la perspectiva del trabajo tecnocrático gubernamental o privado; el fortalecimiento de las instituciones autónomas y del gobierno central, el crecimiento del Sector de Servicios, el de Educación y Comercio, eran las vías más seguras al respecto. Y por último, el obrero agrícola e industrial, en la perspectiva limitada del reformismo, veía las ventajas de las reformas en el sistema de seguridad social, legislación laboral, vivienda, educación, etc. Ahora bien, ese planteamiento se dirigía a fortalecer la conciencia reformista, de tal manera que se identificara al sector burgués reformista como el garante de que esto se llevaría a la realidad; y la forma legítima era por la vía de las elecciones en un Estado de "consenso social". Al respecto, la organización legítima estaba a nivel de los partidos burgueses, donde el surgimiento del Partido Liberación Nacional es una experiencia excelentemente conducida por Figueres.

A nivel de la organización sindical la constituyente no quiebra el sindicato como derecho de los trabajadores pero sí lo mediatiza y le da oportunidades diferenciales para su desarrollo. El PLN alentó en un primer momento la constitución de asociaciones de trabajadores en el Sector Público (el término sindicato fue proscrito), constituyendo los organismos gremiales más conocidos hoy día: Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Aso-

ciación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Asociación de Trabajadores del ICE (ASDEICE), etc. Su objetivo era tener mecanismos organizativos por medio de los cuales los trabajadores del área estatal negociaran ordenadamente sus reivindicaciones, constituyéndose por tanto, básicamente, en una instancia distributiva. El objetivo de fondo fue la constitución de organizaciones desmovilizadas y desmovilizantes que imprimían a sus miembros una ideología economicista, ajena a todo lo que fuera discusión política en un sentido amplio. En tanto que se dieron condiciones para la formación de esta organización, lo que ha existido en Costa Rica hasta hace muy poco tiempo como organizaciones sindicales son las correspondientes al Sector Público que mayoritariamente tienen estas características. No es sino un par de años atrás que organizaciones políticas de izquierda vienen adquiriendo presencia en este sector. Sin embargo, hasta el momento no se puede afirmar que hayan introducido cambios radicales.

Mientras tanto la clase obrera, con excepción de la bananera, continúa al margen de la organización, lo cual en parte se explica por la clara decisión a nivel de Estado y burguesía de no permitir el debate sobre el reparto de la plusvalía donde ella se produce. A nivel jurídico-legal los signos de organización obrera ponen en marcha un pesado mecanismo legal que crea condiciones para la desintegración del incipiente sindicato. Las reglas del juego son totalmente distintas.

Otro paso decisivo que tenía que dar la fracción de burguesía emergente, para dar condiciones suficientes a su proyecto, era la reestructuración del juego democráti-

co burgués. Hasta el 48, la burguesía oligárquica había logrado mantener un ordenamiento jurídico-institucional que le permitía dominar la administración del Estado con el solo dominio del ejecutivo y el legislativo, y reduciendo este juego político a la lucha entre figuras tradicionales que se alternaban en el ejecutivo. Ricardo Jiménez y Cleto González Víquez dominaron varias décadas el panorama político burgués cumpliendo con este papel hasta las inmediaciones de las coyunturas “calientes” de 1940 a 1948. Esto fue quebrado en la lucha que se dio al interior de la Constituyente.

El ordenamiento burgués resultante de la Constituyente destruye el centralismo reinante hasta el momento. El ejecutivo pierde sus grandes poderes y el legislativo toma más funciones. Además, surgen el “tercer” y “cuarto” poder: el judicial y el electoral. La descentralización es la condición básica necesaria para que la fracción emergente pueda “mandar” desde las diversas instancias establecidas, aunque se perdiera el control del ejecutivo. El dominio sobre la Asamblea Legislativa (roto hasta 1978) y la ubicación de sus cuadros en las instituciones autónomas y en los poderes alternos, le da a los grupos en ascenso una capacidad de maniobra inmensa. Los gobiernos de Echandi y Trejos son buenos ejemplos de lo que puede ese poder descentralizado. Estos pudieron retrasar pero no parar las tendencias impuestas por el reformismo burgués.

Si bien es cierto que la pelea dentro de la Constituyente fue ardua y las reformas logradas no fueron, en algunos casos, todo lo radical que se necesitaba, también es verdad que los diputados social-demócratas, aunque en

minoría, pudieron dejar sentadas las bases en la nueva Constituyente para que fuera posible, a los gobiernos liberacionistas posteriores, la implementación de un nuevo tipo de gestión estatal, con una dirección clara hacia la redefinición de los patrones de acumulación anteriores. Veamos algunas reformas claras que se introdujeron:

—El Estado obtiene el derecho a intervenir la propiedad privada, en favor del “interés público”.

—El Estado puede limitar la acción de los monopolios privados.

—Creación de la Caja Costarricense de Seguro Social como institución autónoma para que mantuviera y profundizara los logros de las garantías sociales en lo que se refería a riesgos de enfermedad, invalidez, vejez, muerte y maternidad.

—Establecimiento del derecho de la mujer al voto y a su participación en el campo político.

—Expulsión de la vida pública de aquellos partidos que “atenten” contra la democracia costarricense. Con esto se golpeaba al PVP.

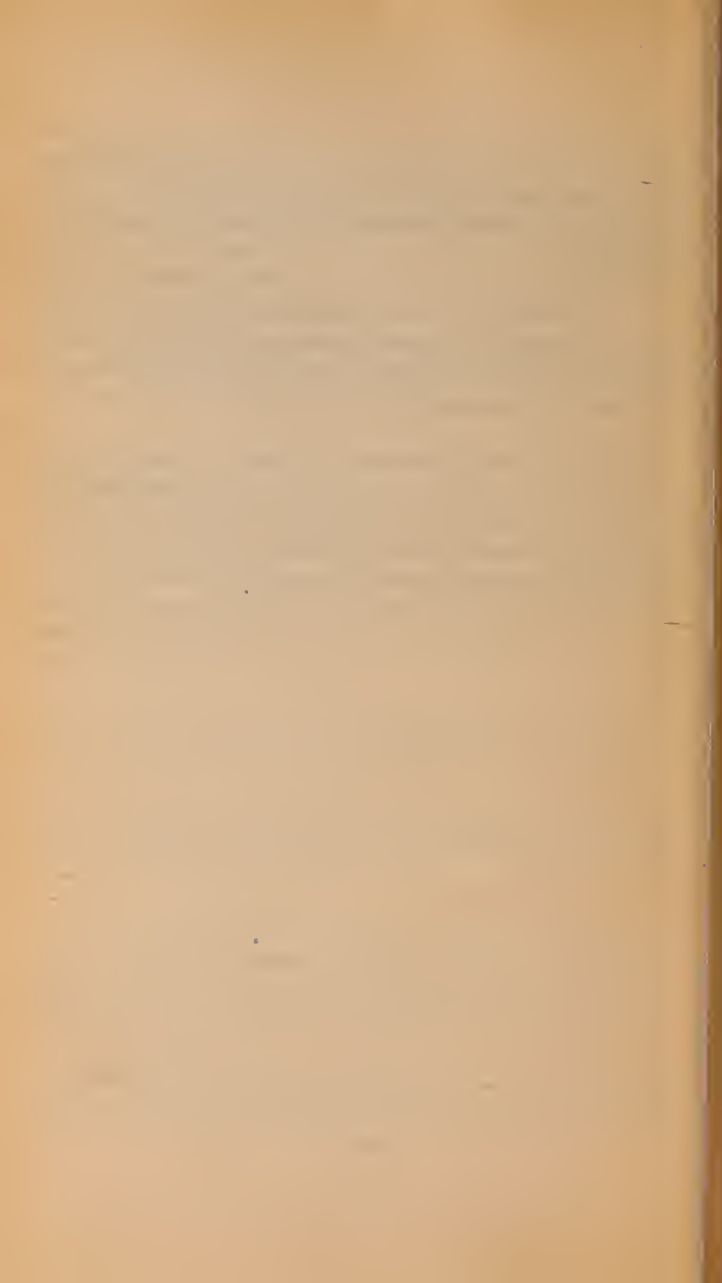
—Pérdida de funciones por el ejecutivo, las que pasaron a manos de instituciones autónomas. Subordinación de éste al legislativo, funcionamiento autónomo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones.

—Organización descentralizada de la Hacienda Pública. El poder Ejecutivo elabora el Presupuesto Na-

cional pero en coordinación con los otros poderes y los ministerios. Aprobación de éste por la Asamblea Legislativa, fiscalización autónoma de la Contraloría General de la República.

—Aprobación para el funcionamiento de instituciones autónomas, con independencia de gobierno y administración. Confirmación de la nacionalización bancaria, ejecutada por la Junta de Gobierno.

Sobre esta base la fracción emergente comienza el proceso de su reproducción como fracción de burguesía, promoviendo un desarrollo capitalista más profundo, lo que generó polos de acumulación necesarios para su fin: consolidarse como burguesía y perpetuarse como tal.



IV. El nuevo capitalismo y la reconstitución de las clases

Al paso de tres décadas de capitalismo dinamizado observamos un perfil de clases sociales más desarrollado y diferenciado. El desarrollo capitalista que resultó, profundizó y extendió el radio de acción de la forma salarial en el conjunto de la fuerza laboral, con lo que las clases dominantes se constituyeron más claramente como burguesía, y el contingente obrero, agrícola e industrial, se fue definiendo como un proletariado íntegro.

El proyecto de diversificación económica suponía el desarrollo de polos de acumulación alternos al café como única forma de generar un "espacio de acumulación" para la fracción de burguesía emergente, y aglutinar sobre esta perspectiva a otros sectores de burguesía no-oligárquica. Pero el proceso al cual se entró no significó una simple suma al café de otras ramas de producción y exportación, más bien, tendía a replantear los mecanismos básicos de acumulación que habían predominado hasta la mitad del siglo. Claro está, que el único elemento que no se podía tocar era el carácter exportable de las producciones a desarrollar, ya que el problema no era simplemente de acumulación, sino de acumulación inserta en el capitalismo mundial.

El punto clave para las nuevas fuerzas residía en garantizar que su acumulación pudiera realizarse sin enfrentar las barreras competitivas que tradicionalmente le habían servido a la burguesía oligárquica para monopolizar los beneficios de la acumulación. Es decir, se trataba de desarrollar la acumulación sobre la base de

nuevos mecanismos, que superaran al dominio oligárquico basado en la comercialización y la propiedad del procesamiento de los productores agrícolas —caso típico de la acumulación cafetalera—. En este sentido es que se piensa en la nacionalización bancaria, la gestión económica del Estado, etc.

En el sector agrario la tendencia a la diversificación lleva a la conformación de nuevas líneas de exportación. Entre 1960 y 1972 lo distintivo es un incremento muy acelerado de la actividad agropecuaria en general (cuya tasa de crecimiento acumulativo anual es de 5.8%) y en particular de las exportaciones, cuya tasa de expansión es superior al crecimiento de la producción agropecuaria. La cifra oficial para esos años es de 9.2% (tasa acumulativa anual).¹³ En este período la participación porcentual del café en el conjunto de la producción agropecuaria de exportación se reduce bruscamente a casi la mitad, mientras que el azúcar, el banano y la carne tienden a duplicar su peso.

En los años siguientes (1972-1976) la tasa de crecimiento de los productos de exportación es menor que en los diez años anteriores, más ello no significa un decrecimiento absoluto, y hay además coyunturas favorables a nivel de los precios internacionales (particularmente del banano y el café) que sacan de apuros en coyunturas críticas con las divisas que aportan.

El desarrollo de los nuevos rubros de exportación significó un movimiento acelerado de concentración de tierras y de desintegración de la economía campesina, con la consecuente expulsión de fuerza de trabajo. El ejemplo

más típico es el de la ganadería, la cual se expande aceleradamente en la región norte del país y en el Pacífico Seco. En menos de 25 años este rubro alcanzó a ocupar el 51% de la superficie de fincas en razón de su expansión de las regiones otrora boscosas y a costo de la pequeña producción de subsistencia. En el año 1973 el proceso de concentración territorial había alcanzado un nivel tal que menos del 8% de los productores pecuarios poseían casi el 70% de la tierra; y, además, los requerimientos de fuerza de trabajo eran bajísimos ya que la relación hombre-tierra oscilaba alrededor de un hombre por cada 50 hectáreas. En el año 1976 la desproporción entre el área ocupada por la actividad y el empleo que generaba era más que notorio, en tanto que allí estaba ocupada alrededor de un 15% de la población empleada en el sector agropecuario.

Por el contrario, las otras actividades de exportación muestran un aumento considerable de la productividad por medio del mejoramiento de insumos y la creciente mecanización. Se desarrollan los grandes centros de producción capitalista, con tecnología superior y acaparamiento de las mejores tierras. De igual forma que la ganadería, el resultado de esto es la expulsión de fuerza de trabajo, y la eliminación progresiva de las actividades complementarias para el semiproletariado, que comienza a desaparecer para convertirse en proletariado íntegro.

Así, el desarrollo capitalista en el sector agropecuario supone la destrucción de la mediana y pequeña producción, conduciéndose hacia una concentración mayor de la propiedad de la tierra. Se da un proceso de formación de fincas grandes y fincas muy pequeñas, mientras la finca de tamaño intermedio comienza a desa-

parecer. La proletarización se comienza a hacer evidente; el pequeño campesino pierde sus tierras y es absorbido por la gran empresa agraria que se moderniza constantemente. Como consecuencia, el pequeño productor que subsiste se ve desplazado hacia las tierras más malas constituyendo, generalmente, una finca más pequeña y dejando la producción de granos básicos para pasar a otras producciones que le den mayor ingreso. El proceso se desarrolló en toda su magnitud durante la década de los sesenta, y da como resultado un estancamiento en la producción para consumo interno.

Por tanto, el común denominador del desarrollo de estas actividades “diversificadoras” es la profundización y extensión de las relaciones salariales como única forma de ingreso para la fuerza de trabajo agraria. Además, en vista de la dinámica capitalista que busca ganancias altas a través de la alta productividad, lo que conduce a la creciente tecnificación, la absorción de fuerza de trabajo no compensa la expulsión natural del proceso, llevando a una actividad migratoria intensa. Hay un desplazamiento de fuerza de trabajo hacia la zona bananera atlántica, reactivada en 1968, y hacia la Meseta Central. La absorción parcial de este contingente obrero se da gracias al crecimiento industrial, del Estado y de los servicios y del comercio.

Por otra parte, la actividad industrial se desarrolla en base a la inversión de la burguesía internacional, fundamentalmente la norteamericana. Crecen aceleradamente aquellas ramas que ofrecían altas tasas de ganancias: textiles, químicos y metal-mecánicos, especialmente. La burguesía nacional participa en la actividad como

socio menor y más que nada en términos de su “capacidad gerencial”. La pequeña y mediana producción se destruye rápidamente y la fuerza de trabajo participa como obrero íntegro. De 1963 a 1972 la producción industrial está hegemonizada por 3 ó 4 empresas transnacionales en cada rama dinamizada, y la fuerza obrera industrial duplica su número. El uso de tecnología superior por la empresa transnacional explica el exterminio de la producción pequeña y mediana, y la relativa poca absorción de fuerza de trabajo.

El proceso de industrialización pone en evidencia el carácter pro-imperialista de la fracción emergente, al legislar y dirigir varios mecanismos estatales en favor de este tipo de industrialización. En este sentido, esto supuso un enfrentamiento con la burguesía oligárquica para obtener el margen de divisas necesario para financiar la inversión y realizar el traslado de ganancias, sin lo cual la actividad de la transnacional no tenía sentido. Desarrollar la industria, en los términos planteados, era un requisito indispensable para impulsar todo el proyecto de diversificación económica; si las necesidades fundamentales de la burguesía internacional no se satisfacían, el proyecto global jamás hubiera funcionado.

Al dinamizar, en términos capitalistas, a las atrasadas relaciones mercantiles, la fracción emergente y la burguesía como un todo se desarrolla más íntegramente como burguesía típica. Esto lleva a desarrollar, velozmente, los diversos mecanismos de gestión estatal. El Estado debía asumir más directamente su papel de coordinador social de las relaciones de producción. Tanto actividades productivas, inconvenientes de asumir para un

capital individual, como actividades legislativas y administrativas, de promotor ideológico y de agente represivo, son realizadas por un gran aparato institucional que defiende directamente, aunque no explícitamente, en muchos casos, los intereses y necesidades de la burguesía costarricense, y aún más, de la burguesía internacional imperialista.

De esta forma, genera una gran cantidad de empleos, algunos productivos y otros improductivos, que permiten la constitución de sectores sociales intermedios entre la burguesía y las clases explotadas. Surge así un numeroso contingente de pequeña burguesía que ingresa a la actividad estatal. Sin tener posibilidades de generar plusvalía por su propia cuenta, logra el derecho a parte de la plusvalía social obtenida por la burguesía gracias a su labor burocrático-administrativa; el pequeño burgués no es ni proletario ni gran burgués, situación que lo lleva a oscilar constantemente en el camino de la lucha de clases. La burguesía en el contexto de su proyecto amplio, se aprovechó de este sector, le dio algunas ventajas de acuerdo a su posición socio-económica y lo aisló de los objetivos sociales de las clases explotadas. Los gobiernos del PLN se han caracterizado por la defensa, en la medida que la coyuntura lo permite, de esta fuerza social tratando de crear en ellos una mentalidad refractaria frente a las luchas legítimas de la clase obrera y el campesinado. En buena medida este objetivo se ha cumplido en tres décadas subsiguientes a 1948, pero en forma decreciente en la última, debido a la situación de crisis y a la necesidad que ha tenido la burguesía de empezar a dosificar e incluso de negar privilegios que estos sectores tenían respecto a los otros componentes de las clases dominadas.

Por otra parte, la gestión estatal ha absorbido un volumen modesto de obreros, pero que no deja de tener importancia, para cumplir las tareas directamente productivas del Estado. Con esto ha generado la posibilidad, en el futuro, de empezar a constituir puntos de convergencia entre la clase obrera y los sectores administrativo-burocráticos, en el marco de un proyecto más amplio de alianza popular.

Similares apreciaciones podemos hacer sobre el crecimiento experimentado en el sector servicios y en el comercio, que, a su vez, encuentra la explicación en las mismas causas que generaron el crecimiento estatal. Sin embargo, hay que precisar que la relación reformista introducida por la fracción emergente, sobre los empleados de estas actividades, se mediatiza, en cierta forma, por el hecho de ser actividades que se rigen más por el criterio de la ganancia individual.

Finalmente, es conveniente describir, en forma gruesa, la lógica macroeconómica del proyecto de diversificación económica.

Lo primero y más importante a apuntar es el carácter subordinado de nuestra economía capitalista al capitalismo mundial. Esto determina que los problemas fundamentales de crecimiento económico se expresen a través de la relación comercial y financiera del país respecto al mundo capitalista. El problema diario de cualquier fracción burguesa en el gobierno, a la hora de definir políticas económicas, es el de generar una mejor relación comercial y financiera del país en el contexto mundial. En términos comunes, el problema es un círculo vi-

cioso: si se dispone de divisas se puede fomentar la producción de más divisas, si no se producen más divisas la actividad económica general disminuye y luego habrá menos divisas, y así sucesivamente. La irónica pena de nuestras burguesías es la de pagar la explotación que ejercen, con un constante déficit creciente en la relación comercial y financiera, sin poder renunciar al pecado original de haber entrado a la división internacional del trabajo con una fuerza mercantil exigua.

De esta manera, el problema central del proyecto de diversificación era el de promover aquellas actividades que tenían salidas significativas en el capitalismo mundial de la post-guerra. Debía de promover actividades generadoras de divisas, y solo de esa forma tendría sentido el uso de los recursos humanos y naturales. La reanimación del capitalismo mundial posibilitó el desarrollo de nuevas líneas de agroexportación, así se desarrollan las exportaciones de carne, azúcar y banano. Sin las alzas cíclicas de los precios internacionales de estos productos los proyectos productivos inherentes nunca hubieran tenido éxito. Además, a partir de lo anterior, se explica la posibilidad de coexistencia entre la burguesía oligárquica y la burguesía emergente; sin perjudicar, desde la perspectiva del agro, el negocio cafetalero se estaban desarrollando líneas de exportación que podían mantener satisfechos a todos, en la medida de las posibilidades reales, tanto políticas como económicas.

Pero, desde otro punto de vista, este nuevo tipo de inserción tenía que complementarse con la ubicación en el país de algunas etapas de la producción industrial

mundial, concretamente, debían abrir las posibilidades a las transnacionales de desarrollar aquellas ramas industriales que les ofrecían alta rentabilidad. Esto complicaba la “simple” diversificación agraria: también había que financiar la inversión industrial y el reintegro de ganancias. Aunque se exportaba bastante producción industrial hacia Centroamérica, también se importaban otras producciones industriales de ella, por lo que el citado financiamiento se sacaba de las divisas “agrícolas” o de inversión extranjera y préstamos internacionales. La práctica demostró que se usaron todas esas fuentes, pero lo más relevante es que la empresa transnacional siempre logró desahogar parte de su inversión y del financiamiento extranjero con divisas generadas por la agroexportación, con lo que el mayor peso lo llevaría la burguesía oligárquica cafetalera. En este sentido, los mecanismos que reportaron más provecho a las transnacionales fueron la legislación sobre protección industrial y el crédito del Sistema Bancario Nacional. Mientras el auge del capitalismo mundial permitiera la dinamización de las principales líneas de agroexportación, este modelo podía subsistir y ocultar las contradicciones sobre las que se desarrollaba. Precisamente, la crisis del capitalismo mundial, que se profundiza a mediados de la década del 70, comienza a actuar en contra de él.



V. La nueva fase crítica a nivel mundial

1. Un cuadro de contradicciones agravadas

Llegamos a un punto en el cual para comprender los nuevos rumbos que se le buscan imprimir a la sociedad costarricense se hace necesario un recuento de la coyuntura por la que atraviesa el sistema capitalista internacional a principios de los años setenta. El objetivo no es establecer relaciones de uncausalidad sino, por el contrario, delimitar el espacio político con que cuenta la burguesía en el plano interno, y las iniciativas que, previa evaluación de la situación externa y de las relaciones de fuerza a nivel interno, pone en marcha.

Como se dijo antes el capitalismo mundial desde la II Guerra disfrutó de un período expansivo significativo, sin embargo las condiciones que lo permitieron comienzan a agotarse a partir de mediados de la década de los 60. Entre estas condiciones estaban la existencia de un ejército industrial de reserva bastante amplio en algunos países del centro capitalista y el desarrollo de la llamada III Revolución Tecnológica que permitió un gran desarrollo de las fuerzas productivas. Ahora bien, el ejército industrial de reserva a partir de los sesenta comenzó a tener una baja de carácter permanente debido a la alta velocidad del crecimiento, lo cual crea condiciones para que las organizaciones sindicales den luchas por aumentos salariales que se traducen posteriormente en aumentos del salario real. Así se tiene un primer freno que produce un estancamiento de la tasa de plusvalía. Por su parte, el gran desarrollo tecnológico empieza a producir sus efectos a través de la elevación de la composición orgánica del capital. En el

período de crecimiento se había logrado contrarrestar esta tendencia en la tasa de ganancia gracias a los bajos precios, sobre todo, de las materias primas. Sin embargo, a finales de los sesenta esto termina y comienzan a observarse alzas en los precios de esos productos cuyo caso más significativo es el del petróleo.¹⁴

En el marco de estas condiciones se produce un desestímulo a la inversión y por lo tanto al crecimiento. El resultado son las tendencias recesivas cíclicas que comienzan a observarse a partir de la década de los sesenta y culminan con la crisis de 1974-1975. En la década de los setenta la recesión empieza a tener un carácter generalizado. Anteriormente los ciclos industriales en cada uno de los países del capitalismo central habían tenido un rumbo no coincidente, pero a partir de ese momento sus períodos recesivos comienzan a coincidir y esto precisamente es lo que produce que la recesión escape de lo controlable y haga crisis en el ordenamiento capitalista internacional. De esta manera el crecimiento en los países centrales se detiene como ocurre por ejemplo en Estados Unidos donde en el período 1960-1967 se tuvo un crecimiento anual de 4.6% pasándose luego en el período 1967-1976 a tener un crecimiento promedio de 2.5% anual. Otro caso es Japón, donde el PNB crece en un 100% entre 1960 y 1967, pero en los diez años siguientes solo se alcanza un crecimiento en un 91%. Paralelamente esto se acompaña de una inflación producida más que todo por la estructura de mercado monopólica, que se había desarrollado por la consolidación de las grandes empresas transnacionales de la posguerra. En Estados Unidos los precios de los bienes de consumo aumentan entre 1960 y 1966 en un 23%, mientras que de 1967 a 1976 crecen en un 70.5%. En Ja-

pón y el Reino Unido el proceso inflacionario es todavía más agudo ya que llegan a tener índices inflacionarios de 223.7% y 252.2% respectivamente en el período que va de 1967 a 1976.¹⁵

En lo que se refiere al desempleo la crisis tiene también profundos efectos. Estados Unidos, que en la década de los 60 tenía una tasa de desempleo máxima de 6.7% anual, llega a tener tasas de 8.5% en 1975. Finalmente, todo esto se traduce en un alza de los precios del comercio internacional lo que revela el carácter generalizado de la crisis. Esto provocará problemas crecientes dentro del orden capitalista metropolitano en la medida en que, cuando se buscan soluciones de carácter internacional y no nacional, se plantea el problema de quién llevará el peso de las mismas. Así, por ejemplo, las balanzas comerciales de Estados Unidos e Inglaterra son las que más rápidamente se deterioran, mientras que Alemania y Japón son los únicos países que presentan balanzas comerciales con superávit.¹⁶

Lo planteado anteriormente lleva a otro de los rasgos distintivos de esta crisis referente a la situación de Estados Unidos.

Como consecuencia del período de crecimiento de los últimos 20 años, la economía alemana occidental y la japonesa llegan a consolidarse como potencias. Basándose en su desarrollo tecnológico logran hacer una ofensiva en el mercado mundial con productos más baratos de forma tal que le ganan terreno a los monopolios norteamericanos. La consecuencia es la pérdida del predominio de EEUU sobre el mercado mundial y la subsiguiente pérdi-

da de las ganancias extraordinarias que obtenía de éste. Resultado de esto es que, si bien la crisis 74-75 es de carácter generalizado, el imperialismo norteamericano es afectado con mayor fuerza, lo que se revela en el déficit crónico de balanza comercial y en la imposibilidad de mantener su hegemonía a nivel del sistema monetario internacional. Ello lo lleva a adoptar una posición más agresiva tanto respecto a sus "aliados competidores", Alemania, Japón, como respecto a la periferia en cuanto al planteamiento de soluciones de la crisis.

En síntesis, estamos ante una crisis de carácter perdurable que puede resumirse como la imposibilidad de volver a tener condiciones anteriores de valorización del capital, dado el marco de la estructuración actual del capitalismo mundial. Esto lleva a plantear conflictos no solo al interior del centro capitalista mundial sino entre el centro y la periferia. Manifestaciones de tales conflictos son precisamente las discusiones en los foros y organismos internacionales sobre el nuevo orden económico internacional y la lucha por la constitución de un nuevo sistema financiero internacional.

Por otra parte tenemos el otro ingrediente fundamental de la crisis, a saber, la problemática del sistema monetario internacional. El actual sistema prevaleciente desde los acuerdos de Bretton-Woods elimina el sistema tradicional del patrón oro, es decir, elimina el ajuste automático de la masa monetaria a las reservas de oro y pone al Fondo Monetario Internacional como la institución que garantiza el funcionamiento del nuevo sistema de cambios internacionales, lo que antes se garantizaba por el estricto apego a las reservas de oro que disponía cada

país. Los criterios rígidos de ajuste al patrón oro que se manejaban antes de la crisis de 1929 se mostraron insuficientes en esta crisis y más bien la profundizaron. Quedó demostrado que la búsqueda de una solución al déficit de balanza de pagos en condiciones de una recesión, por medio de una política restrictiva apegada al criterio de las reservas de oro, lo que hacía más bien era eliminar las amplias posibilidades que se tenían para administrar la crisis desde una perspectiva global y no simplemente monetaria, como lo demostró la filosofía keynesiana posteriormente.

Con el sistema de Bretton-Woods y en el marco de la hegemonía norteamericana posterior a la II guerra mundial se garantizaba una flexibilidad mayor en el sistema monetario internacional. Tal sistema permitía eliminar el problema financiero externo de un país con una compensación por medio de monedas con solvencia financiera internacional reconocida: el caso del dólar y la libra esterlina. Esta flexibilidad posibilitaba reanimar la economía a nivel interno sin tener que sujetar esta dinamización a la solución del problema externo financiero. Tal cosa pudo ser planteada así en la época de Bretton-Woods gracias a las perspectivas de crecimiento de la economía mundial y a la fuerte posición competitiva del imperialismo norteamericano, lo cual hacía prever el mantenimiento de la fortaleza de su moneda para un buen período. Pero, lógicamente, esas condiciones no eran imperecederas.

En los problemas de competitividad de los Estados Unidos, traducidos en déficit crónico de la Balanza de Pagos, se pueden evidenciar las fallas del sistema establecido. Los Estados Unidos comienzan a administrar

su problema permanente de déficit de Balanza de Pagos a través de una política expansiva de su masa monetaria lo que les permite aplazar las contradicciones inherentes a su estructura productiva y amarrar cada vez más progresivamente a los otros centros del capitalismo mundial a su moneda. Este sistema puede subsistir gracias a la situación de que en parte del resto de los centros del capitalismo mundial, las condiciones de reanimación necesariamente dependen de la aceptación de un gran flujo de dólares hacia esos países como única posibilidad para lograr tal objetivo. Sin embargo, en la medida en que el largo período de crecimiento de los 20 años posteriores a la II Guerra Mundial va dando como resultado una mayor capacidad económica para otros centros imperialistas alternos al de los Estados Unidos, se van creando las condiciones para un creciente cuestionamiento a la legitimidad de este sistema. Comienza a explicitarse la realidad inflacionaria del dólar: el marco alemán y el yen japonés adquieren una fortaleza mayor y en la medida en que tienen que subordinarse al dólar se están desvalorizando. En el largo plazo ello significa una pérdida de capacidad financiera para mantener los ritmos de crecimiento de sus respectivas economías lo que se agrava con la inestabilidad que se produciría posteriormente con una devaluación del dólar en relación al oro. Esto ha llevado a las tendencias conocidas de la conversión de parte de las reservas de dólares en oro, situación esta que muestra el carácter crítico en que se encuentra en estos momentos el sistema monetario internacional. De esta forma, la política expansionista de Estados Unidos, que en un principio le servía a su economía y en general a todo el capitalismo mundial, en el transcurso de los años, revierte como una contradic-

ción insalvable del sistema capitalista, planteando entonces una de las áreas centrales de debate para la solución de la crisis. Así, queda en evidencia la imposibilidad de seguir manteniendo un sistema monetario internacional basado estrictamente en el predominio de una o dos monedas "fuertes", máxime si éstas corresponden a economías que no han sido precisamente las que han mostrado mayor dinamismo en el período largo de crecimiento anterior. Se llega así a la conclusión de la necesidad de reestructurar todo el sistema. Pero esto a su vez supone necesariamente un proceso de lucha en la definición del nuevo sistema que se va a construir en tanto que se basará en una correlación de fuerzas distinta a la que se dio cuando se aprobó el actual sistema en Bretton-Woods. La fuerte oposición del imperialismo alemán y japonés se va a revelar en los momentos de la definición y a su vez los Estados Unidos tendrán que ceder en parte los privilegios que le reporta el actual sistema. Si se observan en términos muy gruesos las reformas que se han propuesto al sistema monetario actual se demuestra lo planteado. La idea de crear una euromoneda, por ejemplo, muestra la pérdida de importancia del dólar para el capitalismo europeo. También la tesis de la creación de una moneda mundial revela el momento que atraviesa el capitalismo en que ya no hay una sola potencia que hegemonice el orden competitivo internacional sino que, al contrario, se han creado otros polos de fuerza en el centro capitalista. Ello hace que la competencia que se está dando a nivel comercial necesariamente tenga consecuencias a nivel del sistema financiero. Pero el que se planteen soluciones que van en detrimento de las posiciones norteamericanas no significa que pueda pensarse que la solución se va a dar rápi-

damente, al contrario, supone todo un período de luchas en el cual se tendrán que ir definiendo las fuerzas y los agrupamientos al interior del ordenamiento capitalista mundial.¹⁷

2. Las propuestas de salida de la burguesía imperialista

La burguesía imperialista está conciente de que se está en un momento crucial para el ordenamiento capitalista mundial y que se necesita de soluciones estructurales. Ya en la década de los setenta se comenzaron a manifestar toda una serie de propuestas para lograr tal propósito.

En primer lugar se plantea respecto a la periferia un conjunto de cambios de gran trascendencia, que llevan a un total reordenamiento de la ubicación que se le daba a las economías periféricas dentro de la división internacional del trabajo. El punto de partida está en la llamada necesidad de la interdependencia. Se retomó la tesis de una apertura del comercio tanto del centro como de la periferia sobre bases más equitativas para cada uno. Esto responde al objetivo de obtener mejores condiciones para la reanimación del capitalismo internacional utilizando los recursos naturales y humanos de los países periféricos. Mueren aquí todos los planteamientos de desarrollo hacia adentro, y, extrañamente, se comienza a volver a las antiguas ideas de desarrollo hacia afuera; se plantea como una necesidad para los países periféricos un desarrollo más integrado al capitalismo mundial. Se abandona el objetivo del período anterior, de lograr un desarrollo basado exclusivamente en un

mercado nacional o regional. Se promueve el crecimiento como un problema de vinculación al mercado mundial, lo que conduce a posiciones tendientes a la apertura del comercio, a la eliminación de barreras a éste, y a la reestructuración de la producción interna de acuerdo a esas nuevas condiciones.

A partir del razonamiento anterior la burguesía imperialista hace una proposición de "ayuda con reciprocidad". Propone crear condiciones de inversión en la periferia y adoptar una posición "responsable" frente al financiamiento que ellos están dispuestos a otorgar. En este sentido es que se plantea la necesidad de crear un panorama seguro para la inversión extranjera, es decir, de darle garantías a la empresa transnacional de que pueda invertir sin el peligro de que su inversión sea nacionalizada o sufra algún "perjuicio" de esta índole, o bien, de que sus ganancias se vean perjudicadas por una economía poco sana. Respecto a esto último se esbozan tres lineamientos básicos, que se observan directamente en América Latina como acciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Como punto central se aboga por una Balanza de Pagos "sana", se presiona para que cada país periférico reestructure su producción de tal forma que los problemas crónicos de la Balanza de Pagos sean solucionados. Esto significa promover actividades productivas que generen excedentes externos y eliminen aquellas que por el contrario los succionan; y por otra parte reordenar las Finanzas Públicas. Esto nos lleva a un segundo punto. Se sostiene que es necesario incluir como parte integral del saneamiento de la Balanza de pagos el saneamiento de las Fi-

nanzas Públicas. Esto significa plantearle al Estado una actividad económica más "racional", lo que implica eliminar actividades no directamente productivas, desde el punto de vista del capital, tales como salud, educación, deportes, etc. Más bien se trata de llevarlo hacia actividades que signifiquen un apoyo más directo hacia el esfuerzo de readecuar la estructura productiva. Y finalmente, se propone una acción en el Mercado de trabajo tendiente a crear fuerza de trabajo barata que estimule la inversión, es decir, que provea altas ganancias para la empresa transnacional.

En general, el planteamiento tiende hacia una nueva división del trabajo que pone como fundamento el aprovechamiento de las condiciones naturales existentes en los países periféricos, utilizando sus riquezas en la agricultura y en sus mercados de trabajo que tradicionalmente han reportado una mercancía (fuerza de trabajo) más barata que la que se tiene en el centro capitalista. Reivindicando estas ventajas comparativas en los países periféricos se pretende convencer a las burguesías nacionales de estos países de que esta es la vía para reanimar el capitalismo mundial no solo en el centro capitalista sino también en la periferia. Este proceso de convencimiento no se da linealmente sino que, por el contrario, atraviesa en estos momentos por una serie de negociaciones, algunas positivas otras infructuosas, que enfrentan los intereses de la burguesía imperialista por crear condiciones para un nuevo período de largo crecimiento y los intereses de las burguesías periféricas por obtener en este reordenamiento una mayor ventaja de la que tradicionalmente han disfrutado. En este sentido, pareciera que las condiciones de la burguesía periférica para la negociación están mejor

de lo que estuvieron hace 20 ó 30 años, en vista del avance del campo socialista, de los movimientos de Liberación Nacional, y del equilibrio de poder entre las burguesías imperialistas. Con esto no argumentamos a favor de la posibilidad de una posición nacionalista de las burguesías periféricas sino que se evidencia el mayor margen de acción política de que disponen éstas en las condiciones específicas del actual capitalismo mundial.

Por otra parte, el proyecto de solución a la crisis supone el establecimiento de acuerdos al interior del centro capitalista respecto a la regulación de las relaciones entre las grandes potencias. En estos momentos el punto central de discusión es el comercio interimperialista. Estados Unidos al afrontar una posición desventajosa respecto a Europa y Japón está en una fuerte lucha por lograr una regulación que le resuelva sus problemas comerciales, los que se expresan en su Balanza Comercial deficitaria. Pero además hay otros puntos en los que se requiere llegar a un acuerdo, por ejemplo, están planteadas discusiones sobre los “modelos de explotación” de la fuerza de trabajo (la burguesía norteamericana adopta una posición dura, mientras que sectores importantes de la burguesía europea —la socialdemocracia— plantea una mejor “distribución de los beneficios” entre capital y trabajo).

Finalmente el otro problema central en la resolución de la crisis está en el acuerdo que tiene que darse sobre la reestructuración del sistema monetario internacional. Como ya se ha visto el actual sistema presenta una serie de contradicciones que habrá que resolver para crear condiciones aceptables para que todas las partes interesadas

participen consecuentemente en el reordenamiento. Por una parte, la solución de los problemas que se tienen que dar en el centro capitalista adquiere la forma de una lucha entre grandes burguesías internacionales que pugnan por obtener las mejores ventajas en el nuevo ordenamiento: la burguesía norteamericana tratará de no perder las prerrogativas de que dispone en el sistema actual, y las otras burguesías fuertes —la alemana y la japonesa— buscarán un nuevo sistema en el que las ventajas financieras se obtengan por fuerza económica y no por fuerza política, es decir, que dependa de la fuerza competitiva de cada país. Por otra parte, los acuerdos entre el centro y la periferia adquieren la forma de lucha entre un bloque burgués imperialista dominante que redefine el ordenamiento mundial y unas burguesías periféricas y con esto buscan la coordinación entre ellas para lograr sacarle mejores ventajas a la burguesía imperialista. En este sentido tiene gran importancia la constitución de la OPEP, la constitución de diversas organizaciones de productores de materias primas; y a nivel político, los movimientos como los promovidos por la socialdemocracia latinoamericana, que reivindica posiciones nacionalistas aparentemente anti-imperialistas.

VI. Crisis interna y gobierno de Daniel Oduber

El modelo de desarrollo al que nos referimos más atrás (en el caso de Costa Rica) logró subsistir hasta 1979 sin problemas graves. Producto de la crisis mundial, agravada por el alza de los precios del petróleo decretado por la OPEP este modelo comienza a evidenciar sus debilidades estructurales, y por lo tanto, a activar sus contradicciones, que por la relativa prosperidad y por el clima político tranquilo se mantenían aplacadas.

En primer lugar, se siente el efecto de la debilidad de la agroexportación y del financiamiento externo —encarecido en este momento de crisis— para financiar al desarrollo industrial de “sustitución de importaciones” y a la gestión del Estado que se había consolidado bajo directrices socialdemócratas. Esto llega a manifestarse en el agudo problema de Balanza de Pagos que recibe golpes mortales por el alza de los precios de los combustibles. El precio global de las importaciones aumentó en 1974 en un 42% produciendo un incremento astronómico del déficit del comercio externo, este pasa de \$110 millones en 1973 a \$280 millones en 1974.¹⁸

En segundo lugar, esta situación empeoraba por una política fiscal expansiva que producía un elevado déficit del gobierno central, el que en 1973 alcanzaba una magnitud de ₡ 400 millones, financiándose en un 50% por recursos externos y llegando a significar este déficit más de la quinta parte de los gastos totales.¹⁹

El resultado de esta situación crítica fue el brusco descenso en el crecimiento real del PIB, que pasó de un

5.5% en 1974 a un 2.1% en 1975,²⁰ y el desencadenamiento de un proceso inflacionario jamás visto en Costa Rica. Mientras en los años de 1970, 1971 y 1972 el índice de precios al por menor se mantuvo bajo (4.6%, 3.1%, 4.6% respectivamente) en 1973 pasó a un 15.3% y en 1974 a un 30%.²¹

El Gobierno de Daniel Oduber enfrenta la crisis tratando de solucionar principalmente el agobiante problema de la Balanza de Pagos. En 1974 las reservas monetarias internacionales llegaron a un escaso saldo de \$38.3 millones, con lo que apenas se financiaban 19 días de importaciones.²² Esto llevó a la implementación de una fuerte restricción de las importaciones referentes al consumo de lujo. Se establecieron drásticas sobretasas e impuestos selectivos de consumo, llegando varios al nivel del 100%. Complementariamente, se frenó el crecimiento de los gastos del Gobierno Central, tratando de financiar este moderado crecimiento con el producto de los nuevos impuestos a las importaciones y restringiendo el financiamiento externo a este tipo de gasto. El resultado fue una disminución en el déficit global, que en 1973 representaba un 26.7% de los gastos totales mientras en 1974 llegó a ser un 16.1% de los gastos totales.²³

Gracias a estas medidas el problema coyuntural se comienza a resolver. Ya en 1975 el déficit del comercio exterior bajó a \$200 millones²⁴ y el crecimiento de los precios se detiene, el índice de precios al por menor bajó a un 18% en 1975.²⁵ Sin embargo, el problema estructural sigue presente, y el gobierno está consciente de ello, pero no adopta una política tendiente a lograr soluciones estructurales, más bien adopta la posición de dejar para luego el inicio de éstas.

Pero por otra parte, como producto de esta situación, la relación entre las distintas clases y sectores de clase tienden a tensarse. En la burguesía hay un debilitamiento de la solidaridad colectiva en razón de una intensificación de la competencia entre los distintos capitales individuales, en tanto que se entra en una nueva fase de concentración y centralización. A nivel de los sectores populares, particularmente urbanos, hay una revitalización de las luchas que se gestan en torno a la defensa del nivel de vida, sumamente maltratado en razón de la espiral inflacionaria y por la decisión política del Partido Liberación Nacional de sacrificar principalmente a los grupos urbanos. El planteamiento que subyacía tal decisión era el de reducir la brecha salarial con respecto a los asalariados agrícolas a costa de la clase obrera y los asalariados urbanos, sin afectar las ganancias del capital.

Para enfrentar esta situación, el gobierno cuenta con grados de libertad adicionales provenientes del "sector externo". Para el período de 1976-1977 disfruta de un aumento de los precios del café en el mercado internacional: el precio pasa de \$1.26 el kilo en 1975 a \$4.72 en 1977.²⁶ Con este precedente, las amenazas de polarización de la lucha de clases y la forma de desarrollo y expansión de la burguesía no oligárquica, hacen que los líderes liberacionistas dejen de lado una política anti-crisis que reposara en las restricciones a las importaciones, limitaciones en el gasto público y el crédito, así como en el freno al endeudamiento externo, tal como aconsejaban los sectores liberales. Contrariamente, se opta por un modelo que profundiza algunas de las líneas de desarrollo precedentes. Se va a reforzar el papel del Estado en su doble condición de agente orientador del proceso económico y de re-

activador de la economía, postergándose para más adelante el problema de enfrentar el costo monetario y social que tal decisión implicaba en tanto tal proyecto solo podría materializarse profundizando el endeudamiento externo o interno.

Como parte de los beneficios más directos que recibe la burguesía en esta coyuntura tenemos una expansión del crédito proveniente de la Banca Nacional y un reforzamiento de aquellas instituciones que podían jugar un papel destacado en la reanimación del ciclo económico. La línea oficial busca compensar el deterioro en los términos de intercambio revitalizando el comercio de exportación. En función de este objetivo se desarrolló una política crediticia generosa, tanto en los montos de los recursos que se canalizan hacia el sector privado, como en el precio del dinero. El ritmo de expansión del crédito es directamente proporcional al impacto de la crisis. En 1974 el crédito se incrementa en un 43.4%, en 1975 en un 38.2%, en 1976 en un 23% y en el año 1977 en un 25.6%. Su destino será en un 75% para la agricultura, la ganadería y la industria. Asimismo las tasas de interés bancario se mantienen bajas. Ciertamente hay una disposición de encarecer el crédito comercial y personal como parte de las medidas indirectas de desaliento de las importaciones y de contención de la inflación. Sin embargo, el crédito hacia los sectores productivos se mantiene subsidiado, lo que favorece la acumulación aunque también las maniobras especulativas.

Los incentivos a la producción llevan a una expansión del sector público. En el agro se desarrolló una agresiva política de creación de obras de infraestructura (vgr:

caminos, electrificación) que eleva los presupuestos de las instituciones correspondientes lo mismo que el precio de algunos servicios fundamentales; se fortalecen instituciones cuya tarea es dar servicios técnicos, y se establecen seguridades a los inversionistas a través de mecanismos como el seguro de cosechas y los precios de sustentación (estos últimos provocarán pérdidas millonarias para el Estado por sobreproducción en la cosecha de arroz). En virtud de esto los recursos crediticios captados por entidades oficiales como el Consejo Nacional de Producción aumentan en cosa de un año (1975-1976) más de un 50%.²⁷ En general los recursos del sector público agropecuario tienden a aumentar en estos años.

La referencia que hemos hecho hasta aquí al sector agropecuario no es casual. La política anti-crisis del Partido Liberación Nacional implica una vuelta al agro como eje de dinamización de la economía. No es explícitamente una política que busque debilitar la industria. De hecho no hay ninguna medida que pueda ser identificada con este propósito. Los sectores allí asentados son beneficiados por el crédito industrial y se les conserva las barreras proteccionistas que han servido de marco para su expansión. Sin embargo, ya hay una conciencia de su debilidad para poder neutralizar una balanza comercial desfavorable. De allí que se empiece a plantear una reorientación de la industria en razón de aprovechar las ventajas comparativas en el comercio internacional, la necesidad de un mayor aprovechamiento de insumos locales y de la capacidad instalada, así como de un desarrollo industrial más intensivo en cuanto al uso de fuerza de trabajo.²⁸ Con esto queda esbozada una eventual fractura en el bloque dominante, que por lo pronto solo se traduce en una menor im-

portancia coyuntural de la industria del Mer-Común. La puesta en marcha de la política "estatizante" obliga a dos tipos de medidas. Por una parte tenemos un mayor endeudamiento externo en razón del cual Costa Rica tendrá para 1976 una deuda que representa el 40% de su producto interno bruto y cuyo servicio absorberá aproximadamente el 28% de las exportaciones de bienes y servicios (en 1970 el servicio captaba el 12% del valor de las exportaciones). El uso del crédito contratado en el exterior se convertirá en una práctica frecuente tanto para el sector público como para el sector privado. El primero ve en él una medida indispensable para el fomento de actividades que pudiesen ser fuente de divisas. De allí también que sean los bancos los que aumenten su participación en la deuda pública total, pasando de un 26% en 1970 a casi un 37% en 1977, lo cual ocurría paralelamente a la disminución del peso relativo del Gobierno Central. Un elemento que hay que tener en cuenta son las presiones provenientes del endeudamiento, como el alza registrada en las tasas de interés, la reducción en los plazos de amortización y la contratación de créditos con bancos privados en términos muy onerosos para el país.

En lo que se refiere a la deuda externa del sector privado ésta también tuvo una rápida expansión. En 1977 el saldo de la deuda externa privada fue de \$612 millones, el cual superaba en un 76% el saldo del año 1973.

La otra línea a la que antes hacíamos referencia está orientada a desarrollar mecanismos de captación de ahorro interno por parte de instituciones del sector público y de constitución de las mismas en fuentes de crédito para los proyectos del Gobierno Central. Tal proyecto to-

ma cuerpo en medidas dirigidas al congelamiento de salarios para los trabajadores del sector público, con lo cual se buscaba contener el abultado presupuesto estatal y tener un fondo disponible sobre el cual echar mano tanto para préstamos al gobierno como para financiar la expansión de instituciones claves en los planes de desarrollo capitalista. Un ejemplo de lo primero es el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual a pesar de tener como fin primordial la salud se ha constituido en un organismo que tiene una buena parte de sus recursos orientados a las actividades financieras, siendo su principal deudor el Estado mismo. En los conflictos laborales que se han presentado en años recientes, el argumento principal de la directiva de esta institución para no responder a las demandas de los trabajadores ha girado en torno a su incapacidad económica.

Otro ejemplo es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que so-pretexto del incremento en el precio de los energéticos empieza, desde 1975, la práctica de decretar alzas periódicas en los servicios. Como problema de fondo está el endeudamiento externo de la institución y las tareas principales que se le tienen asignadas dentro de los planes de creación de obras de infraestructura en las áreas rurales. También en este caso los salarios son congelados, se dio el caso de que un aumento concebido a sus trabajadores a mediados del año 1976 fue detenido por orden expresa del presidente de la República, lo cual dio lugar a una huelga que fue sofocada con la participación de los cuerpos represivos.

La creación de fuentes para nuevos recursos tiene un claro contenido de clase. A lo que arriba mencionábamos

debe agregarse la constitución o el reforzamiento de mecanismos de ahorro obligatorio apoyados en los grupos asalariados, aunque no dejan de incidir sobre la burguesía. La universalización del Seguro Social y el reforzamiento del Banco Popular son dos vías mediante las cuales se impone un ahorro forzoso a los sectores que tienen ingresos en forma de salarios. La burguesía aunque teóricamente debe aportar una parte para estos fines ha logrado escamotear en buena medida sus compromisos mediante la postergación de sus pagos. Por otra parte, objetivamente este tipo de responsabilidades debilitan a sectores de pequeña y mediana burguesía, los cuales al aumentar sus costos se les resta posibilidad de competencia. En este sentido actúan también favoreciendo un proceso de acumulación originaria a la vez que son fuente de capital-dinero para la gran burguesía, tal como se puede derivar de la experiencia de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Cabe especificar que la única medida que se canalizó contra la burguesía y que era difícil de sortear fueron los gravámenes a las exportaciones de café que se impusieron después de la devaluación de 1974. Sin embargo esto es momentáneo. Posteriormente serán reducidos sensiblemente y sustituidos por impuestos sobre bienes de consumo no esenciales con lo cual los sectores cafetaleros dejan de ser afectados en tanto que el golpe cae sobre la burguesía comercial²⁸ y los consumidores.

Retomando el punto referente al papel del Estado es necesario tener presente que si bien la política oficial afecta negativamente a los sectores asalariados del sector público, su crecimiento tanto en términos de presupuesto

como de empleo no se detiene. En relación con el empleo el Gobierno Central y el Sector Público pasaron de 86.900 empleados en 1973 a 111.300 en 1976, es decir, en el centro mismo de la situación crítica se crean casi 25.000 nuevos empleos.

La razón de ello se puede establecer a tres niveles. El primero ya aludido se refiere al fortalecimiento de aquellas instituciones cuya actividad pueda compensar la recesión en la inversión privada. En segundo lugar tenemos una acción preventiva destinada a ayudar la situación de los sectores que se encuentran al margen de la producción y cuyo número ha aumentado. A ellos principalmente se dirige una política asistencial financiada con un impuesto de ventas y con un recargo de un 2% sobre las planillas. Tal programa cobra urgencia en tanto que los conflictos laborales y comunales tienden a presentarse con una regularidad desconocida en los años anteriores haciéndose necesarias por lo tanto respuestas rápidas. Por otra parte, los insumos que requieren tales programas (v. gr: alimentos) ayudan en la reactivación de sectores productivos específicos.

En las áreas rurales el Estado tiene un papel importante en la intensificación de la política redistributiva. Su resultado inmediato es un mayor acceso a los servicios colectivos por parte de los trabajadores rurales y un alza salarial que hacia fines del año 1977, elevaba en forma significativa la remuneración real de la fuerza de trabajo. Esto era un objetivo de gran importancia puesto que el proceso de concentración capitalista que se ha producido ha tendido a romper las formas de producción no capitalistas, particularmente fuera de la región cafetalera. Hay por lo

tanto una necesidad social del capital de crear condiciones para la reproducción de la fuerza de trabajo en el marco de una predominancia de relaciones sociales mercantil-capitalistas. Además se tiene el problema de retener la población en los campos, en tanto que el agro es conceptualizado como el espacio de reanimación de la economía. —

En tercer lugar el Estado es un punto de apoyo de gran importancia para un sector de la burguesía conectada con la fracción gobernante del Partido Liberación Nacional. Al agudizarse la competencia entre los capitales individuales tal sector ha intensificado su relación con el Estado para así poder tomar ventaja sobre sus congéneres de clase. El grupo así beneficiado se otorga un privilegio especial en el aprovechamiento de las oportunidades de inversión que se crean y recibe los beneficios que la burguesía busca otorgarse con una mayor intensidad. El ejemplo más comentado en este sentido es la creación de la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA) constituida con el objetivo de realizar grandes inversiones que la empresa privada no pudiese asumir por sí misma, para que, una vez que hubieran madurado financieramente tales proyectos, pudiesen ser trasladados a la empresa privada a través de la Bolsa Nacional de Valores.

En el mismo sentido el tono sentencioso y moralista con que los grupos burgueses de la oposición se oponen a la presencia en el país del financista norteamericano Robert Vesco es parte de esta disputa por los privilegios no generalizados. La presencia de un factor de “competencia desleal” lleva a que un sector del capital levante en forma puritana y restringida las banderas contra la corrup-

ción que dada la forma como se ejercita tiende a constituirse también en una lucha contra las tendencias estatizantes. Estas serán las dos principales banderas que levantó durante la campaña electoral el actual presidente de la República, Carazo Odio.

A la altura del año 1977 la economía costarricense tiende a recuperar el ritmo de crecimiento de los años previos a la crisis. Sin embargo, como producto de la forma en que ésta se enfrentó y de los beneficios diferenciales que la gestión estatal reportó en ese período para las distintas fracciones burguesas se da un nuevo reagrupamiento político. Dentro del mismo partido Liberación Nacional hay fisuras importantes. Un sector del partido se hace eco de las acusaciones contra el equipo de gobierno, particularmente en lo referente a la corrupción. Con ello quedaba confirmado tal comportamiento, así como su intensidad. Igualmente quedaba confirmado que ni siquiera dentro de esta organización hubo una política de beneficio colectivo. El debilitamiento del partido gobiernista se expresa también en una intensificación en la migración de importantes personajes y sectores sociales, buena parte de los cuales se reagrupará en la oposición en alianza con la vieja oligarquía. En este sentido una de las características más notables de lo que luego será el Partido Unidad, será la primacía de ex-liberacionistas entre los cuadros directivos.

Por otra parte la pequeña burguesía urbana y rural así como los asalariados urbanos, principalmente los que de una u otra manera han estado expuestos a conflictos laborales y han resentido la política de sacrificar "la ciudad en aras del campo", buscan otros encuadres políticos. El

Partido Liberación Nacional solo logrará conservar la base social entre los sectores agrarios beneficiados por la política de "redistribución" y en los sectores burgueses que han sido beneficiados más directamente por la línea de reactivación económica.

Todo esto se reflejará en las elecciones de 1978 donde la oposición gana con gran soltura, conquistando tanto el control del Poder Ejecutivo como el Legislativo. Además son las áreas urbanas la que dan la victoria al Partido Unidad.

VII. La administración Carazo y las nuevas fuerzas en el Gobierno

El elemento central en la elección presidencial de febrero de 1978 es la unidad de la oposición a la fracción de la burguesía socialdemócrata. Se logra reunir a las más significativas expresiones políticas de la burguesía oligárquica y al grupo reformista con mayor perspectiva de crecimiento como lo era el Partido Renovación Democrática conducido por Rodrigo Carazo. Los une la necesidad de juntar sus fuerzas para derribar del Gobierno a la socialdemocracia (Partido Liberación Nacional) y plantear una nueva propuesta para enfrentar el juego político y económico dentro de los márgenes más estrechos de una situación de crisis. Es igualmente un esfuerzo por parte de los sectores burgueses "marginados", dentro y fuera del Partido Liberación Nacional, por establecer nuevas reglas de juego que enfrenten a los grupos beneficiados por el estatismo de la última administración liberacionista. No es sino hasta este momento que la burguesía oligárquica logra una expresión política electoral que no tiene igual en los últimos 30 años. Logró unir a sus clásicas críticas al Estado "paternalista" una base popular que se movilizó detrás de una nueva figura, la de Rodrigo Carazo, quien habiendo disentido del PLN se presentaba ante la masa electoral como la gran alternativa al continuismo de ocho años de ese partido. De esta forma Renovación Democrática y los sectores oligárquicos se juntan en un mismo bando, con el objetivo de lograr la administración del Estado y poder dirigir la economía nacional hacia sus respectivos intereses. Esto se da en un momento en que la coyuntura nacional e internacional exige un cambio de grandes proporciones.

Paralelamente, están como elementos explicativos de la victoria de Carazo los que se refieren a los dos gobiernos anteriores del PLN. En un primer lugar tenemos el resquebrajamiento que se está dando al interior del PLN por la política centralizadora de beneficios de parte del grupo que se forma alrededor de Oduber en la última administración. Esto produce la deserción de varios miembros relevantes del PLN que se van al Partido Unidad.

Y en un segundo lugar, está el relativo crecimiento de los conflictos sociales, que afectan principalmente a la pequeña burguesía estatal, lo que elevó su nivel de organización y combatividad, aunque todo esto enmarcado en los límites de la legalidad vigente. De todas formas esto producía un deterioro de la imagen del PLN como administrador del Estado y consecuentemente una pérdida de confianza del electorado.

1. El carácter de la alianza al Interior del Partido Unidad

Resulta importante hacer algunas precisiones sobre el carácter de esta alianza que se da entre un grupo reformista y una burguesía oligárquica conservadora. Dados sus intereses y sus posiciones doctrinarias tan disímiles, la única forma de explicar su unión es la necesidad de administrar el Estado en este período de crisis: el grupo Carazo para poderse consolidar como burguesía y la burguesía oligárquica para detener un proyecto reformista que no comparte.

El grupo de Carazo es una fracción de burguesía marginada del PLN que busca crearse condiciones de

acumulación de la misma manera que los sectores emergentes en 1948. Es precisamente por la imposibilidad de ascender en la estructura interna de poder del PLN, que se separan de él y constituyen su propia organización para lograr el objetivo planteado. Esto evidencia que mantienen el mismo "defecto" congénito que tenían en su inicio los grupos aglutinados alrededor del PLN, como lo es la desventaja competitiva respecto a la burguesía oligárquica.²⁹ De lo anterior se desprende necesariamente que la primera contradicción inherente a la alianza Carazo-oligarquía se debe a la ubicación desigual en la acumulación de las fracciones que la componen. Pero, aunque el grupo de Carazo tenga características similares a las del PLN no se le pueden atribuir las mismas condiciones políticas ya que carecen de una base social desarrollada, una estructura partidaria consolidada; y además intenta generar condiciones para su proyecto en un período de crisis, difícil de manejar, distinto por lo tanto al que dio base al surgimiento del PLN. Esta situación se revela en el programa de gobierno del Partido Unidad en donde impera la visión liberal de la burguesía oligárquica.

Por otra parte, la burguesía oligárquica había estado marginada de la administración del Estado durante los últimos ocho años, los últimos de los cuales comprendían el período de crisis. Esto la hace tener que cargar con parte de los costos de la crisis en base a una forma de enfrentarla que no comparte. Así, llegar a la administración del Estado le significa implementar las soluciones adecuadas a sus intereses y doctrinas, ahorrándose costos "innecesarios" propios de la filosofía "paternalista" del PLN. Es claro que por su mejor posición competitiva es proclive a posiciones liberales que no necesitan, en última ins-

tancia, una hegemonía de tipo ideológico, y que más bien en determinadas circunstancias busca la "solución fácil" de romper el juego democrático burgués, aunque en las circunstancias actuales se ha mostrado contrario a llegar a tales extremos. Pero no es solo por su filosofía liberal que se trata de enfrentar la crisis con un nuevo modelo económico, sino también porque dispone de un contexto externo que promueve ese tipo de salidas. Precisamente el FMI fomenta políticas económicas tendientes a cambios estructurales como los que se plantean. De esta forma, disponen de un apoyo de la burguesía imperialista, que jamás en los 30 años anteriores habían logrado tener, y más bien en estos momentos, a *primera vista*, parece ser el sector idóneo para instrumentalizar esta política.

Los términos en que se plantea el inicio del nuevo modelo económico son de sobra conocidos en América Latina. Se parte del problema de Balanza Comercial, que, en general, se traduce en problema de Balanza de Pagos, y paralelo a esto el problema fiscal. De aquí se pasa al punto central de la estrategia, la caracterización de la crisis, manifiesta en los dos problemas anteriores, como un problema de estructura productiva rígida para las condiciones actuales del capitalismo mundial. Entonces se deriva la necesidad de un cambio de estructura productiva.

Ahora bien, en los dos grupos que integran el Partido Unidad no hay un criterio uniforme sobre cómo debe cambiar la estructura productiva. Carazo y su grupo busca esto mediante un proceso más o menos lento de acomodo de las fuerzas políticas de la burguesía y una descarga gradual del peso de las medidas económicas sobre los sectores populares. Mientras, la burguesía oligárquica pro-

mueve una política de cambios más rápidos sin preocuparse demasiado por las reacciones de los diversos grupos sociales y buscan crear, también rápidamente, un mercado de trabajo barato y por lo tanto atractivo a todo tipo de inversionista.

El criterio dominante a la hora de definir los planes generales ha sido el de la burguesía oligárquica, dada su fortaleza económica y el apoyo del FMI, condiciones insuperables para la debilidad del grupo caracista. Sin embargo, Carazo tiene cierto margen de acción política, ya que mantiene el dominio del Ejecutivo lo que le permite dominar gran parte de su gabinete. A partir de esto implementa políticas más moderadas respecto al criterio oligárquico. Así desarrolló una estrategia cuidadosa de avances y retrocesos según la correlación de fuerzas. Ejemplos de esto son los intentos de elevar las tasas de interés sobre los créditos del Sistema Bancario Nacional, y la restricción de estos mismos; estos intentos han enfrentado una fuerte oposición de los sectores afectados, y han obligado al gobierno a variar su posición inicial. También está el caso de algunos sindicatos del Sector Público que han logrado imponer aumentos salariales sin que el gobierno oponga una resistencia beligerante.³⁰ Aquí está claro que, independientemente del criterio de cada fracción política la nueva estrategia de cambio implica agudizar las contradicciones en las clases subalternas e incluso entre las mismas fracciones burguesas. En el contexto de la democracia burguesa costarricense ello significaría la necesidad de un orden político más centralizado y autoritario. Sin embargo, esto debe ser un proceso conducido en forma cuidadosa donde la burguesía no arriesgue su principal conquista, a saber, su hegemonía. En este senti-

do la coyuntura centroamericana está siendo una experiencia muy rica para la burguesía costarricense. Además debe señalarse que el cambio que se requiere en el orden político no lleva necesariamente a una dictadura militar, ya que existen una serie de posibilidades intermedias que cobrarán vida en la medida en que la burguesía logre mantener la lucha de clases en el marco de la legalidad burguesa, basta recordar aquí el ejemplo de Colombia con una gran dosis de violencia interna por parte de las clases dominantes pero sin romper la estructura democrática-burguesa.

Para hablar propiamente del modelo que se busca aplicar hay que ubicarlo dentro del contexto específico de Costa Rica. En ese sentido es interesante ver la forma en que se plantea lógicamente la necesidad del cambio dstructural.

Se enfatiza la necesidad de un desarrollo integral de la persona, abandonando el "paternalismo" estatal, promoviendo la "libertad de escogencia" e incluso la "autogestión". Con esto se pretende reducir el Estado a un plano subsidiario y simplemente garante del bien común. Esta es una forma muy hábil para hacer que el pueblo costarricense vaya cediendo a una serie de prerrogativas que la burguesía socialdemócrata le había concedido dentro del esquema político de los años cincuenta, en materia de servicios sociales y a una relativa prosperidad dado el crecimiento experimentado en las últimas décadas. Al respecto, cumple un papel importante el tipo de organización comunal que propone el gobierno, lo que se identifica como la herramienta central para combatir el "paternalismo" estatal, y que no es sino una forma de transferir

a la comunidad una serie de actividades que antes tenía el Estado y que ahora, en la perspectiva de su desmantelamiento, deben eliminarse del presupuesto estatal³¹.

En términos económicos propiamente, el modelo propone una explotación "racional" de los recursos naturales. Se plantea el regreso a la agricultura y la eliminación de la industria de integración, a la que le atribuye subsistencia por intervencionismo estatal. En cambio, se propone una industrialización acorde con la nueva perspectiva de desarrollo de la agricultura, por lo que se concluye que la característica fundamental del desarrollo futuro es su carácter integral, o en otras palabras, la constitución de una fuerte agroindustria. Sin embargo, para poder obtener esta estructura productiva, se debe realizar una política de estabilización la que resolvería el problema financiero externo y el fiscal. Resolver el problema externo significa redefinir la política de endeudamiento adoptada por el PLN, calificada de exageradamente expansiva; y por otra parte, adoptar una posición restrictiva respecto al sector estatal y a la permanencia de actividades calificadas de parasitarias e ineficientes para un desarrollo integral. Esto lleva necesariamente a desembocar en el problema fiscal, donde se esboza una perspectiva de debilitamiento de aquellas actividades de carácter social que había venido afrontando el Estado, como salud, educación, deporte, etc., y más bien se propone darle a éste un papel más "productivo" enfatizando en aquellos ministerios o instituciones autónomas que tienen una incidencia productiva más relevante: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Instituto Costarricense de Electricidad, etc.

En general, el objetivo de la política de estabilización es el desmantelamiento de las actividades privadas y gubernamentales que requieren una inversión de recursos externos y que no reportan suficientes beneficios para el capital en general. Con esto se busca que las importaciones correspondan a un esfuerzo productivo, la base de la cual está en una diversificación de la producción agropecuaria en la perspectiva de su comercialización mundial. En lo que se refiere a la gestión estatal esto significa adoptar un énfasis hacia las actividades que efectivamente dan un apoyo al capital, olvidando progresivamente los esfuerzos por darle beneficios indirectos al trabajo. Como resultado deberían obtenerse unas finanzas "sanas" —en la visión del capital— y debería solucionarse el problema externo, conteniendo el ritmo de crecimiento de las importaciones y elevando el de las exportaciones. Tales condiciones significarían un clima apropiado para la empresa transnacional, ya que tendría un panorama económico y financiero que permite la inversión rentable y la salida posterior de sus ganancias.

Es ocioso reiterar las presiones del FMI y los objetivos que persigue esta institución al ejercerlos, pero puede ser relevante el mostrar la integración de criterio entre las autoridades económico-financieras del gobierno y las presiones del FMI. Al respecto, es reveladora la defensa pública que hizo Carazo de la política económica de su gobierno en diciembre de 1979, en donde quedó clara la imposibilidad de oponerse a un programa fiscal y tributario acorde con los criterios de aquella institución. En aquel momento, dicho programa fue presentado por el FMI como condición indispensable para la aprobación de un préstamo de estabilización —única solución coyuntu-

ral al problema crónico de Balanza de Pagos—. Su aprobación significó una respuesta del FMI muy reveladora:

“La Misión del Fondo Monetario Internacional ha analizado la situación económica y financiera del país y sus perspectivas a corto plazo. Esta ha concluido que es indispensable realizar un sustancial esfuerzo para frenar el serio deterioro en la Balanza de Pagos. La misión cree que para lograr un alivio en las presiones de la Balanza de Pagos de 1980 es preciso realizar un considerable ajuste fiscal. Para lograr este objetivo es indispensable una acción conjunta tanto de recorte en los gastos del sector público como de un aumento en los ingresos fiscales para obtener una indispensable reducción en el déficit del sector público en 1980.

En este sentido la misión se complace en anotar que, tanto en el ámbito gubernamental como en el político, existe un consenso cada vez mayor sobre las serias dificultades fiscales y la necesidad de adoptar una acción correctiva a la mayor brevedad posible.

Las autoridades han suministrado a la Misión un programa financiero que contempla una firme acción en el campo fiscal, crediticio y de endeudamiento externo. La Misión está convencida de que la aplicación efectiva e integral de este programa constituirá el inicio de una acción decidida hacia la solución de los problemas fiscales y de balanza de pagos. Desde luego, la acción del gobierno deberá extenderse más allá de 1980 para lograr un saneamiento fiscal a fondo y perdurable. La misión estima que el programa de acción del gobierno consti-

tuye una base adecuada para que el fondo monetario aumente su asistencia financiera a Costa Rica".³²

2. *Perspectivas*

La política de estabilización es obstaculizada en su concreción por la existencia de un conjunto de contradicciones. A nivel formal aparece como una "incapacidad de gobernar" de Rodrigo Carazo. Sin embargo, esta "incapacidad" tiene una explicación de clase que no admite dudas.

En primer lugar tenemos que precisar el carácter contradictorio de la alianza de los grupos que constituyen el Partido Unidad. La combinación de líneas reformistas y de enfrentamiento moderado, por una parte, y de líneas liberales y de enfrentamiento directo por otra, conduce a la elaboración de una política de reestructuración sin un criterio homogéneo. Las fricciones que se dan frenan el proceso de cambio y agudizan otras contradicciones que actúan simultáneamente.

En segundo lugar, está la contradicción entre la necesidad de usar el orden institucional prevaleciente, dada la imposibilidad política del Partido Unidad de cambiarlo de golpe en estos momentos —lo que supondría abrirle un amplio campo político al PLN y a la coalición de izquierda Pueblo Unido—, y, la necesidad de la política de un orden institucional más centralizado³³ que permita al Ejecutivo una mayor rapidez en los cambios que requiere la estructura económica. Avanzar en esto último, es decir, en el proceso de centralización, supone para el Partido

Unidad un período incierto en el que puede ganar pero también puede perder mucho, pero en todo caso mantenerse en el actual ordenamiento significa limitar el proceso de cambio y agudizar las contradicciones. Aprovechando esta circunstancia el PLN, e incipientemente el Partido Pueblo Unido, hacen oposición al Partido Unidad generándose espacios políticos para una eventual reforma constitucional y para llegar a las próximas elecciones con una ventaja política importante.

Posteriormente, tenemos la contradicción entre el carácter represivo del modelo y la necesidad de mantener el juego democrático burgués. Dado el contexto centroamericano de una lucha de clases cada vez más agudizada, la burguesía costarricense y, especialmente la aglutinada en el Partido Unidad, ve una serie de peligros a la hora de implementar sus políticas liberales de reestructuración del modelo económico. Esto los lleva a pensar seriamente la viabilidad política de su esquema de cambio.

Estas tres contradicciones sintetizan el entramamiento que tiene en estos momentos el gobierno de Unidad, y que en pocas palabras significa la imposibilidad de implantar, en toda su dimensión, el esquema de cambio sin antes haber logrado una centralización política de tal naturaleza que permita a la fracción de la burguesía que esté en la administración del Estado una rapidez significativa en la implementación de las medidas y, si es necesario, adoptar medidas represivas en caso de que haya respuesta popular de cualquier índole. Debe resaltarse que esta centralización política no necesariamente significa la dictadura militar sino, básicamente, la urgencia de reestructurar el orden institucional para darle al ejecutivo y

a la fracción burguesa que esté en el gobierno una mayor soltura para poder implementar sus proyectos. Ahora bien, si toma fuerza una oposición "institucional" de izquierda que llegue a plantear obstáculos al esquema de cambio, o bien, si la lucha de clases traspasa el puro marco de la democracia burguesa, posiblemente la burguesía *en su conjunto* tendrá que llegar a la alternativa militar. Sin embargo, esas condiciones por el momento parecen difíciles de que se puedan dar en Costa Rica. Pero de hecho todo el proceso que hemos resumido hasta acá va acompañado de un fortalecimiento de los cuerpos represivos, y un conjunto de iniciativas encaminadas a legitimar el uso de la violencia institucional.

Estas contradicciones plantean un problema serio a la burguesía en su conjunto, ya que limita las posibilidades de un acuerdo en un momento en que sus diversas fracciones están luchando arduamente por llegar a mantenerse en la administración del Estado. Al respecto es interesante analizar la posición del vocero más significativo de la burguesía oligárquica, el cual se muestra particularmente agudo al advertir que el problema es un problema político y no económico propiamente, es decir, no es un problema de ineficacia de una determinada administración del Estado para poder implementar el esquema, sino que, fundamentalmente, el problema es de que alguna fracción de la burguesía logre la hegemonía política necesaria. Veamos:

“¿Quién llevará a cabo todas o algunas de estas medidas de emergencia? Esto plantea el problema de la viabilidad política que está detrás de los más persistentes y graves problemas del país. La crisis

fiscal como resultado de un crecimiento hipertrofiado del gasto público a una tasa mayor de la economía nacional no es un problema económico sino político. Son las políticas pasadas y presentes las responsables de esta situación. Entonces las recomendaciones de los economistas como resultado de su enfoque puramente profesional de la crisis fiscal no son realistas si a la vez no sugieren su instrumentalización política. En otras palabras, ni las medidas de emergencia de tipo puramente monetario o fiscal, ni las que tratan de cambiar el esquema de desarrollo, son posibles sin un cambio previo o paralelo del esquema político. *Solo este cambio puede proporcionar la voluntad política que hace falta para atacar la crisis fiscal conforme las recomendaciones técnicas de los economistas. Y es precisamente este aspecto de la situación fiscal que ahora se debate, lo que también debe ser dilucidado. Esta situación obliga, entonces a enfocar políticamente el problema en debate. No se trata de qué es lo que debemos hacer. Se trata de si realmente queremos hacer eso que debemos hacer*''.³⁴

Y finalmente tenemos otra contradicción que viene de la naturaleza del proyecto de la nueva división internacional del trabajo enarbolado por la burguesía imperialista. Como ya se ha estado precisando anteriormente, al interior de la burguesía imperialista se van gestando fraccionamientos irreversibles que llevan a proyectos políticos de dominación y de explotación de la fuerza de trabajo diferentes. Esto aunque en la presente coyuntura no se traduzca en diferencias explícitas de gran tamaño sí lleva, implícitamente, el germen de contradicciones, lo

que crea un margen de acción para las burguesías de los países periféricos en la medida en que ya no tienen que apoyarse única y exclusivamente en el criterio de la burguesía norteamericana, sino que pueden disponer de otras alternativas en coyunturas críticas. Precisamente a partir de esta situación es que pueden darse una serie de movimientos a nivel regional, en diversas partes de la periferia, en los que se reivindican posiciones nacionalistas y anti-imperialistas, algunas no tan genuinas, pero que en el fondo revelan precisamente la posibilidad de esbozar este tipo de planteamientos y a partir de ellos buscar un espacio político mayor. Respecto al caso de Costa Rica es interesante ver la participación del PLN en todo el movimiento que está gestando la socialdemocracia latinoamericana y que se ha traducido en "posiciones de carácter progresista", como por ejemplo tenemos la Conferencia de Oaxaca y la reciente Conferencia de la socialdemocracia internacional en República Dominicana, donde la socialdemocracia costarricense tuvo una participación significativa.

Como criterio sintético podemos decir que la burguesía en su conjunto y la burguesía internacional pueden plantearse para Costa Rica la viabilidad de un esquema de cambio tendiente a una inserción en la nueva división internacional del trabajo de acuerdo a los postulados que ellos están planteando en estos momentos, gracias a que la lucha de clases se ha enmarcado dentro de los límites del juego democrático vigente. Esto les permitiría pensar en resolver el orden de contradicciones que hemos mencionado a partir de un arreglo entre las diversas fracciones de la burguesía, sin tener que recurrir a una solución radical de la contradicción fundamental entre capi-

tal y trabajo. Es decir, en la medida en que el problema central de la reproducción de la sociedad no está planteado, la burguesía en su conjunto puede tener un margen de acción mayor y tratar de llevar adelante el esquema de cambio. Sin embargo en el resto de Centroamérica esta posibilidad política prácticamente ha terminado y el problema en esos países se reduce ya no tanto a la implementación de un esquema de cambio sino simplemente a la pura subsistencia del orden vigente. En este contexto la burguesía costarricense se enfrenta a alternativas que cada fracción parece querer responder de acuerdo al cristal con que mira la sociedad. Así, la unidad de la burguesía, en una acción común que requiere gran audacia, es tan solo una posibilidad más entre las que están planteadas.

En términos genéricos la política seguida durante la administración Carazo plantea a nivel nacional la contradicción entre el desarrollo consecuente de una política económica de corte neo-liberal y la preservación de la hegemonía sobre las clases dominadas. Las "ambigüedades" y "oscilaciones" que hasta el momento se le han atribuido al gobierno se encuentran dentro de tales alternativas. Ello nos advierte sobre interpretación ligera de la política de la fracción en el Gobierno. Igualmente, nos recuerda que la alternativa mencionada no es exclusiva del Partido Unidad, sino que una eventual administración liberacionista en el año 1982 se tendrá que enfrentar, dadas las circunstancias internas y externas, a situaciones similares si no peores.

Notas

1. Censo de Población, 1927.
2. Ramírez, Mario; SOLIS, Manuel. *El desarrollo del capital en la industria costarricense 1850-1930*. Tesis de Grado. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, 1979.
3. Samper, Mario. *Evolución de la estructura socio-ocupacional costarricense, labradores, artesanos y jornaleros 1864-1935*. Tesis de Grado Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, 1979.

En este mismo censo los propietarios agrícolas, incluida desde la burguesía hasta los pequeños productores y minifundistas representaba el 23% de la población ocupada lo cual es cifra absoluta y relativa, menos que la de los jornaleros.
4. Hall, Carolyn. *El Café y el desarrollo histórico geográfico de Costa Rica*. Editorial Costa Rica, Universidad Nacional, San José, 1976: 102.
5. Aguilar Bulgarelli, Oscar. *Costa Rica y sus hechos políticos de 1948*. (EDUCA) 1974: 66-94.
6. Aguilar Bulgarelli, Op. Cit.: 95.
7. Rojas, Manuel. *Lucha social y guerra civil en Costa Rica 1940-1948*. (Editorial Porvenir), San José, 1979: 135.
8. Citado por Rojas. Idem.
9. Backer, James. *La Iglesia y el Sindicalismo en Costa Rica*. Editorial Costa Rica, San José, 1975: 102-103.
10. Rojas, P. Cit.: 52.

11. El problema militar es tratado también en función de la política de alianzas. La perspectiva política de Vanguardia Popular no preveía un desenlace violento de los acontecimientos, luego el partido no se prepara para enfrentar una guerra. Una vez desencadenada ésta se dependía de las armas que el gobierno quisiera entregar. Este último presionado por la Embajada Norteamericana, y por su propio contenido de clase, se niega a proveer a los comunistas de las armas que tenía en sus aranceles.
12. No debe olvidarse que a principios de los 50 hay intentonas insurreccionales contra Figueres de gente de pertenencia a su ejército. Así mismo está la contrarrevolución de 1955. En estos años Figueres perdió políticamente algunos de sus cuadros militares más destacados que se aproximan a la oposición. El ejemplo más claro es el de Frank Marshall.
13. OPUNA, *Primer sondeo de diagnóstico de realidad nacional*, Heredia, julio de 1979; 144.
14. Un tratamiento detallado del agotamiento de las condiciones de crecimiento del periodo de "onda larga" se encuentran en el trabajo inédito de Nilson Araujo de Souza "*Crisis y lucha de clases en Brasil*" Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía.
15. Véase Theotonio dos Santos: "La crisis capitalista: carácter y perspectivas" en: *Carter y la lógica del imperialismo*. EDUCA, San José, Costa Rica, 1978 p. 250-251.
16. Theotonio dos Santos: Op. Cit., p. 251-253.
17. Para mayores precisiones sobre este tema véase

- Mandel Ernest. "*Ensayos neocapitalismo*" Editorial ERA, México, 1976: 91-95; 99-104.
18. OPUNA, Op. Cit., 101-104.
 19. OPUNA, Op. Cit., p. 102.
 20. Arrea Escalante, Juan "*La economía costarricense en el período 1974-1978*". Banco Central de Costa Rica, 1974, Cuadro A. Y elaboración propia.
 21. OPUNA, Op. Cit., Cuadro N° 2.5: 105.
 22. Arrea Escalante, Juan. Op. Cit.,: 34.
 23. OPUNA, Op. Cit.: 108.
 24. Idem, Cuadro N° 2.4: 104.
 25. Idem, Cuadro N° 2.5: 105, Posteriormente el índice bajó aún más en 1976. Fue del 3.5% y en 1977 del 4.2%.
 26. OPUNA, Op. Cit.: 118.
 27. OPUNA, Op. Cit.: 121.
 28. Oficina de Planificación Nacional y Política Económica. *El Desarrollo Socioeconómico de Costa Rica, 1963-1976* (Documento para discusión), 1978:18.
 29. Las trabas que se imponen al comercio importador hacen que el sector de la burguesía comercial-intermediaria sea la más afectada por la política que se pone en marcha. Los otros sectores de la burguesía tendrían como principal presión los cargos a las planillas por concepto de Seguro Social, Banco Popular y Asignaciones Familiares. En ese sentido no hay un golpe frontal puesto que, como ya señalamos, algunos de estos cargos son sorteables además de que tienen los beneficios atrás comentados por su condición de "sectores productivos", según la definición gubernamental.

30. Durante el año pasado se dieron varios “escándalos” en los cuales parientes muy próximos del Presidente de la República fueron presentados como personas que buscaban un enriquecimiento rápido con la sombra del Gobierno.
31. Sin embargo ello debe ubicarle. El último aumento concedido a los trabajadores del Gobierno Central y a los trabajadores universitarios se dio después de la lucha de los trabajadores de la Provincia de Limón que por su fuerza agudizó las contradicciones interburguesas.
32. Hay otros servicios estatales que simplemente son reducidos. El ejemplo más claro de ello es la propuesta de “austeridad” que lleva adelante el Ministerio de Educación Pública en marzo-abril de 1980, lo que motivó una situación de huelga de 10 estudiantes de secundaria. Ha esto hay que sumarle la eliminación del financiamiento para actividades deportivas, infantiles y juveniles; la reducción del presupuesto de Asignaciones Familiares, etc.
33. La Nación, 21 de diciembre de 1979: 37 (subrayados nuestros).
34. Este problema se hizo evidente en la crisis parlamentaria de finales del año pasado cuando el PLN mantuvo a la Asamblea Legislativa detenida por más de dos meses, ello incluso cuando Unidad tiene mayoría en este cuerpo. Al final Carazo optó por intervenir directamente, saltándose las instancias normales, debilitando con ello al Legislativo.
35. Editorial de *La Nación*, 29 de agosto de 1979; subrayados nuestros.



BIBLIOGRAFIA

AGUILAR BULGARELLI, Oscar. "La Constitución de 1949. Antecedentes y Proyecciones", Editorial Costa Rica. Costa Rica, 1973.

ARAUJO DE SOUZA, Nilson. "Crisis y lucha de clases en Brasil", Tesis Doctoral. UNAM, México, 1980 (inédito).

ARIAS SANCHEZ, Oscar. "Nuevos rumbos para el desarrollo costarricense" EDUCA, Costa Rica, 1979.

BACKER, James. "La iglesia y el sindicalismo en Costa Rica" Editorial Costa Rica, Costa Rica, 1974.

BELL, John P. "Guerra civil en Costa Rica. Los sucesos políticos de 1948" EDUCA, Costa Rica, 1976.

BRIONES, Alvaro; CAPUTO, Orlando. "América Latina: nuevas modalidades de acumulación y fascismo dependiente" en *El control político en el cono sur, Siglo XXI*, Editores, México, 1978.

BRIONES, Alvaro DOS SANTOS, Theotonio. "La coyuntura internacional y sus efectos en América Latina" en: *Carter y la lógica del imperialismo*. EDUCA, Costa Rica, 1978.

CAPUTO, Orlando. "El nuevo modelo de acumulación y la política económica en Chile" Casa de Chile en México, México, 1978.

DOS SANTOS, Theotonio. "La crisis capitalista carácter y perspectivas" en: *Carter y la lógica del imperialismo*. EDUCA, Costa Rica, 1978.

MANDEL, Ernest. "El capitalismo tardío" Ediciones ERA, México, 1979; "El dolor y la crisis del imperialis-

mo" Ediciones ERA, México, 1974; "Ensayos sobre el neocapitalismo" Ediciones ERA, México, 1976; "La crisis 1974-1980" Ediciones ERA, México, 1980.

OFICINA DE PROGRAMACION, Universidad Nacional de Costa Rica: "Primer sòndeo de diagnóstico de realidad nacional" Heredia, Costa Rica, 1979.

OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL DE COSTA RICA. "El desarrollo económico social de Costa Rica en el período 1978-1982" Costa Rica, 1978.

"Metas de Progreso", (Plan Nacional de Desarrollo 1978-1982), Costa Rica, 1977.

Plan Nacional de Desarrollo 1979-1982. "Gregorio José Ramírez, Costa Rica, 1979.

ROJAS B., Manuel. "Lucha social y guerra civil en Costa Rica 1940-1948", Editorial Porvenir, Costa Rica, 1979.

SAMPER, Mario. "Evolución de la estructura socioocupacional costarricense: labradores, artesanos y jornaleros, 1864-1935". Tesis de grado. Universidad de Costa Rica, 1979.

RAMIREZ, Mario y SOLIS, Manuel. "El desarrollo del capitalismo en la industria costarricense 1850-1930", Tesis de grado. Universidad de Costa Rica, 1979.

STONE, Samuel. "La dinastía de los conquistadores" EDUCA, Costa Rica, 1975.

JL1450 .S68

Las perspectivas del reformismo en Costa

Princeton Theological Seminary-Speer Library



1 1012 00140 8840

El escrito que presentamos no es un trabajo acabado. Se trata más bien de un conjunto de proposiciones para discutir que los autores han elaborado como un subproducto de un trabajo más amplio, motivados por la discusión que en estos momentos se da a nivel nacional en torno al futuro del país. En un sentido estricto no puede entenderse como un estudio de coyuntura, es más bien un ensayo que busca enmarcar la problemática actual dentro de la evolución social y política del país en los últimos veinticinco años.



Departamento Ecuménico de Investigaciones